

MIGRACIÓN FORZADA DE COLOMBIANOS

Colombia, Ecuador, Canadá

COLOMBIA

Marta Inés Villa Martínez
Ana María Jaramillo Arbeláez
Luz Amparo Sánchez Medina

CORPORACION
REGION



FLACSO
ECUADOR

Primera edición

Septiembre 2007
Medellín, Colombia

Edita

CORPORACIÓN REGIÓN
Calle 55 N° 41-10
Teléfono: (57-4) 2166822
Fax: (57-4) 2395544
Medellín, Colombia
coregion@region.org.co
www.region.org.co

ISBN: 978-958-8134-36-9

Coordinación académica

Pilar Riaño Alcalá
Marta Inés Villa Martínez

Corrector de estilo

Álvaro Molina

Fotos

Archivo de la investigación

Coordinación editorial

Luz Elly Carvajal G.

Diseño e impresión

Pregón Ltda

Esta publicación tiene el apoyo de:
Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo –Ciid–, Colciencias, Social Sciences and
Humanities Research Council, Canadá –Sshrc– y Agro Acción Alemana –AAA–

Impreso en papel ecológico fabricado con fibra de caña de azúcar

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	7
INTRODUCCIÓN.....	11
PRIMERA PARTE	
CONTEXTOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO EN COLOMBIA.....	15
CONTEXTOS SOCIALES Y POLÍTICOS.....	17
Factores estructurales causantes del desplazamiento forzado	17
Los procesos históricos de violencia.....	19
PANORAMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO:	
DINÁMICAS Y TERRITORIOS (1995-2005).....	20
Período 1995-1997.....	22
Período 1998-2002.....	23
Período 2003-2005.....	24
El desplazamiento hacia las fronteras.....	25
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN	
DESPLAZADA EN COLOMBIA.....	28
Las tipologías.....	29
Los motivos	29
Autoría o responsables del desplazamiento	29
Bienes abandonados.....	29
Características de los hogares	30
Escolaridad	31
Estado de salud	310
Ocupación e ingresos.....	32
Vivienda	33
Redes de apoyo y organizaciones sociales	34
Necesidades.....	35
Intención de permanencia	35
Conclusiones.....	35
Referencias	36

SEGUNDA PARTE

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO DESDE LA EXPERIENCIA DE LA POBLACIÓN.....39

ESTUDIOS DE CASO..... 41

MEDELLÍN Y EL DESPLAZAMIENTO FORZADO..... 41

 Medellín y el Área Metropolitana un panorama general..... 41

 Medellín, ciudad receptora de población desplazada 43

 Procedencia por regiones de la población desplazada 44

 Ubicación de las personas en situación de desplazamiento en Medellín..... 44

 Características sociodemográficas de la población desplazada en Medellín
 y el Área Metropolitana 45

 Sobre la trayectoria organizativa de la población desplazada 46

 Medellín, ciudad expulsora 47

 Población desplazada en Medellín y el Área Metropolitana 47

 Desplazamiento intraurbano en Medellín 48

El desplazamiento forzado intraurbano desde
la experiencia de las personas afectadas..... 50

Los casos de estudio 51

 Desplazamientos masivos..... 51

 Desplazamientos individuales..... 54

 El miedo, un sentimiento siempre presente en la experiencia
 del desplazamiento forzado..... 55

 Antes de la salida forzada 56

 La salida..... 59

 Después 61

 Con el desplazamiento forzado aumenta la vulnerabilidad
 de la población afectada..... 62

 Los albergues..... 65

 Lo horrible, lo inolvidable y lo irrecuperable. Miradas al pasado 70

 Situaciones límite y pérdidas 71

 Con respecto al futuro 73

 Las representaciones sociales y autorrepresentaciones
 desde la población desplazada 74

Conclusiones 80

Referencias 81

URABÁ..... 82

 Contexto general 82

 Urabá, región construida por inmigrantes..... 83

 Conflicto armado y desplazamiento 84

 Urabá como lugar de expulsión y recepción de población desplazada..... 88

 Condiciones de vida de la población desplazada en Urabá 90

 Implementación de la política de atención a la población
 en situación de desplazamiento en Urabá 91

La experiencia del desplazamiento 92

 Los miedos experimentados..... 93

 Lugares marcados..... 93

 Las muertes cercanas 94

 La salida..... 96

La experiencia de la población en los lugares de recepción en Urabá	98
Estrategias de supervivencia.....	99
Las pérdidas	100
Percepciones y autopercepciones.....	101
La experiencia organizativa	101
El miedo al retorno	103
La experiencia de la población desplazada de Urabá en Medellín.....	103
Estrategias de supervivencia.....	105
Percepciones y autopercepciones.....	107
La experiencia organizativa	108
¿Reparación?.....	109
Conclusiones.....	109
Referencias	111
EL ORIENTE ANTIOQUEÑO.....	113
Contexto general.....	113
Conflicto armado y desplazamiento	114
Los lugares de recepción de población desplazada en el oriente	120
Características de la población desplazada	121
Implementación de la política de atención a la población en situación de desplazamiento en el Oriente Antioqueño	122
La experiencia del desplazamiento	123
Los miedos experimentados.....	124
Colaboradores a la fuerza.....	124
Por salvar los hijos.....	126
Entre balas, carros-bomba, bloqueos y masacres	126
La salida.....	130
La experiencia de la población desplazada en los lugares de recepción en el oriente.....	130
Estrategias de sobrevivencia.....	130
Iniciativas de organización	132
Percepciones y autopercepciones.....	133
La experiencia de la población desplazada del oriente en Medellín.....	133
Estrategias de sobrevivencia.....	134
Percepciones y autopercepciones.....	137
La experiencia organizativa	137
Las pérdidas	138
Los retornos	139
Conclusiones.....	141
Referencias	143
CONCLUSIONES ESTUDIOS DE CASO	144
TERCERA PARTE	
POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA.....	149
TEXTOS, REPRESENTACIONES, PRÁCTICAS.....	151
EL TEXTO: LAS POLÍTICAS DE DESPLAZAMIENTO.....	153
El desplazamiento forzado en América Latina	153
Derecho internacional y políticas públicas sobre desplazamiento forzado en Colombia...	156
Los principios rectores sobre el desplazamiento forzado.....	158

El desplazamiento forzado interno en la Constitución Política de Colombia	159
La Ley 387 y sus principales desarrollos normativos	159
Los componentes de la política pública sobre desplazamiento forzado	162
La prevención	162
La declaración y el ingreso al Sistema único de registro –Sur–	162
La atención humanitaria	164
El restablecimiento	165
El desplazamiento forzado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional	167
REPRESENTACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS:	
LA MIRADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	171
El lugar del sujeto: la interpretación de “alguien”	173
El problema: ¿el desplazamiento o los desplazados?	176
Los “destinatarios” de su acción: Los desplazados	177
Los verdaderos y falsos desplazados	178
Desplazados = oportunistas y dependientes	180
¿Los desplazados son víctimas?	182
Los desplazados como sujetos de derechos	183
Representaciones que guían la acción: incidencia en la implementación de las políticas públicas sobre restablecimiento	185
LA OTRA CARA DE LA MONEDA: LAS POLÍTICAS Y LOS FUNCIONARIOS VISTOS POR LA POBLACIÓN DESPLAZADA	187
La declaración: Un paso que se aprende	187
El registro: “Y me dieron la carta...”	189
La atención humanitaria: “Cuando llegan las ayuditas”	191
El restablecimiento	192
El retorno: entre la subsistencia y la muerte	193
Reasentamientos precarios: “Entre las necesidades las más”	194
Reparar lo irreparable... ..	197
La discriminación y el engaño	198
Aprender los derechos, ser ciudadanos	200
Las políticas como instrumento	202
Conclusión	203
Referencias	204
CONCLUSIONES GENERALES	207

URABÁ

Ana María Jaramillo Arbeláez

Contexto general

Urabá es una de las regiones del país en donde los procesos de desplazamiento forzado han sido más intensos y continuos. Esto ha sido así especialmente en el período de auge del paramilitarismo (1985-1998). A partir del 2003 y aunque las cifras dan cuenta de una disminución en población desplazada, ello no ha representado un cese de este fenómeno. Según las cifras de Acción Social, entre 1995 y septiembre del 2006 allí han sido desplazadas 62.186 personas, lo que equivale a un 20% del total de población desplazada en el departamento (Gobernación de Antioquia, 2006).

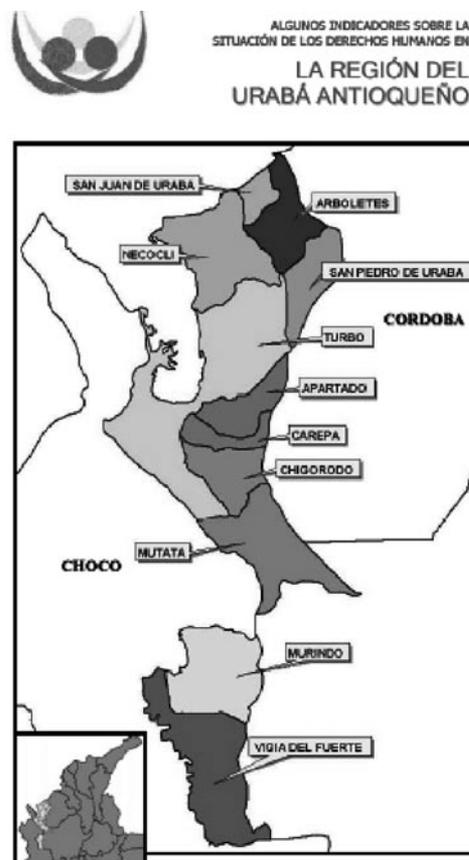
El Urabá antioqueño tiene una extensión aproximada de 11.664 km² y una ubicación geoestratégica privilegiada, dada su condición de zona de frontera con Centroamérica y hacia el interior del país. A su vez forma parte de una macrorregión que comprende territorios pertenecientes al departamento del Chocó, occidente y norte de Antioquia y el sur de Córdoba. Está dividido en tres zonas: el norte (municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Necoclí), el eje bananero (municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá) y el sur (Vigía del Fuerte y Murindó). En la figura 13 se puede apreciar la localización de estos municipios.

Apartadó es el centro urbano regional por excelencia y concentra el mayor número de población urbana, también alberga el 90% de las instituciones oficiales, el comercio, la banca, los gremios y las instituciones de salud y de las inversiones del Estado.

Urabá también se distingue por la implantación de economías ilegales relacionadas con el contrabando de armas, mercancías y el cul-

tivo y comercio de la marihuana y de la coca, actividades todas que se han visto favorecidas con la existencia del puerto de Turbo y del río Atrato y sus afluentes, el auge del narcotráfico y de grupos armados ilegales.

Figura 13. Mapa de Urabá



Fuente: Vicepresidencia de la República. Observatorio de Derechos Humanos (2006).

Con la globalización, Urabá adquiere mayor importancia ante la perspectiva de la construcción de un nuevo puerto para facilitar la comunicación con el litoral pacífico, de la carretera marginal del Caribe (Turbo-Cartagena-Guajira) y de una vía alterna a Panamá por el

tapón del Darién. Otra ventaja radica en su biodiversidad al formar parte del Chocó biogeográfico, reconocido como uno de los pocos reductos de biodiversidad que quedan en el mundo y representado en la existencia de nueve parques nacionales naturales, una extensa área de selva húmeda tropical, cadenas montañosas, numerosos ríos, material genético que ofrece posibilidades para desarrollar el campo de la biotecnología y consolidarla como una de las principales actividades económicas de la región e incluso del país (Gobernación de Antioquia, 2006).

En Urabá ha tenido lugar un proceso de concentración de la propiedad en manos de ganaderos, bananeros, y a partir de los años ochenta, de narcotraficantes y paramilitares, lo que ha conllevado el despojo, mediante mecanismos violentos, de campesinos pequeños y medianos propietarios de tierras. Así lo confirma un informe de la Contraloría General de la nación, según el cual en Colombia se ha producido una contrarreforma agraria, dado el nivel de apropiación de las mejores tierras del país por parte de narcotraficantes y paramilitares, particularmente en zonas de frontera agrícola ideales para los cultivos ilícitos, el procesamiento de drogas y la inversión en zonas ganaderas. Según los estimativos más conservadores, ello representa un 2,8% del territorio nacional y un 5% de las tierras potencialmente explotables, aproximadamente un millón de hectáreas (Contraloría, 2006). Antioquia es uno de los departamentos más afectados por la concentración de tierras (coeficiente Gini¹ de 0,83), especialmente en subregiones donde ha habido una combinación entre auge de paramilitarismo y narcotráfico: Magdalena Medio (0,73), Occidente (0,72), Bajo Cauca y Nordeste (0,70), el Norte y Urabá (0,67) (Gobernación de Antioquia, 2006).

De manera reciente, la Gobernación de Antioquia, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y las personerías de

varios municipios avanzan en la ejecución de un proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, con el propósito de contribuir a la protección y devolución de tierras expropiadas de forma violenta. Para el segundo semestre del 2006, en Urabá, se habían recibido 366 solicitudes individuales de protección de predios que hoy están abandonados (Gobernación de Antioquia, 2006:61).

Urabá, región construida por inmigrantes

La diversidad social y cultural que caracteriza a Urabá se debe en gran parte a la llegada de grupos de población procedentes de otras regiones del departamento de Antioquia y de Bolívar, Córdoba y Chocó que han encontrado en esta rica región oportunidades de sobrevivencia con la pesca, la agricultura, empleo en compañías extranjeras dedicadas a la explotación de tagua, madera, caucho, raicilla —en los comienzos del siglo XX— y en la construcción de obras de infraestructura (carretera al mar, años 50) y a partir de la década de 1960 con la vinculación a empresas destinadas a la exportación de banano.

La diversidad étnica se aprecia en la existencia de varias comunidades indígenas y afrocolombianas. En cuanto a las primeras, la Gobernación de Antioquia para el año 2001 reporta la existencia de 43 comunidades pertenecientes a 15 resguardos localizados en Necoclí, Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Turbo, Murindó y Vigía del Fuerte, y 10 comunidades indígenas no pertenecientes a resguardos

1. Gini es el coeficiente que mide la concentración de la tierra y el grado de desigualdad de los ingresos. Permite ver las condiciones de equidad en cuanto a la tenencia de la tierra y las posibilidades de acceso a la misma. Sirve, además, para determinar la utilización y desarrollo que puede tener un territorio. Varía entre 0, que representa la menor concentración de la tierra y ausencia de desigualdad, y 1 que es el grado máximo de desigualdad o mayor concentración de la tierra.

dos en Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, Chigorodó, Mutatá y Murindó. Por otra parte, la población afrocolombiana ha tenido una importante presencia en la región, hacia el bajo y medio Atrato.

La localización de estas comunidades en territorios con una ubicación geográfica privilegiada y abundantes riquezas naturales las convierte en un blanco de los actores armados. Los asesinatos de importantes líderes, las masacres, arrasamiento de sus cultivos, las órdenes de desalojo ponen en riesgo su existencia. Sin embargo, los avances logrados por las comunidades indígenas en la constitución de una organización regional —la Organización Indígena de Antioquia, OIA— con el objetivo de lograr la titulación de sus resguardos y la defensa de su autonomía favorecen la gestación de estrategias de resistencia. En 1994, por ejemplo, la asamblea de gobernadores indígenas de Urabá dio a conocer una declaración en la cual sustenta su posición de neutralidad frente al conflicto armado y las distintas fuerzas que lo protagonizan, y su rechazo a “cualquier tipo de colaboración con ninguna fuerza armada, llámese guerrilla, autodefensas o ejército” (Hernández, 1999).

Por su parte, las comunidades afrocolombianas logran un importante avance con la aprobación de la Ley 70 de 1993² que otorga títulos colectivos sobre sus tierras en el bajo Atrato (1996), el medio Atrato (1998) y en el 2001 en el Baudó. Pero este es el momento a partir del cual estas comunidades empiezan a ser golpeadas con la ocurrencia de masacres, desplazamientos y la usurpación de sus tierras, directamente o propiciada por los grupos armados, en particular los paramilitares, parte interesada en el control de territorios para actividades de narcotráfico y los cultivos de palma africana. Al igual que las comunidades indígenas, han contribuido a la gestación de experiencias de paz y convivencia, como las

comunidades de paz del bajo y medio Atrato (comunidad de San Francisco de Asís)³.

Conflicto armado y desplazamiento

En Urabá, la violencia constituye un eje de pervivencia histórica asociado a la manera como se ha dado la explotación de sus recursos, a los procesos de modernización y de concentración de la propiedad de la tierra, y a ciertos períodos de auge de la violencia política en el país (Uribe, 1989:39-44). Importa mencionar el protagonismo de esta región en la violencia de mediados del siglo XX, analizado en profundidad por Roldán (2003) y que presenta inquietantes similitudes con el presente, en aspectos tales como el accionar de bandas armadas que obligaron a huir a grupos de población que encontraron refugio en lugares cercanos a Urabá y la ciudad de Medellín.

En los inicios del Frente Nacional, el pacto bipartidista que puso fin a la violencia de los años cincuenta, la violencia política se recrudece en Urabá con el tránsito de núcleos de guerrillas liberales hacia la guerrilla de las Farc que combinan su adhesión al marxismo-leninismo con prácticas de “limpieza” de cuatros, ladrones, delatores y el ajusticiamiento de administradores de fincas considerados abusadores de su poder contra los trabajadores.

En 1973, las Farc oficializan la creación del V Frente en San José de Apartadó, un acontecimiento relevante en lo político y lo militar por ser la resultante de un trabajo de politización que se venía adelantando por parte del Partido Comunista y por su ubicación estratégica cerca del piedemonte de la Serranía de

2. Con la Ley 70 de 1993 o “ley de negritudes” se logra el reconocimiento legal de los derechos étnicos de las comunidades negras por primera vez introducidos en la Constitución Política de 1991. Así mismo, en el Decreto 1.745 de 1995 se adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras.

3. Para un mayor detalle sobre la experiencia de comunidades de paz en Urabá ver a González y Bolívar (2002:150-155).

Abibe, un punto de avanzada para la expansión hacia Turbo, Mutatá, Riosucio y hacia Peque e Ituango. Sin embargo, esta parece haber sido una época de relativa tranquilidad alterada por las incursiones del ejército y acciones puntuales de las Farc. También por esta época el Ejército Popular de Liberación (EPL), otra agrupación recién conformada y surgida de una disidencia del Partido Comunista, intenta echar raíces entre la población campesina del norte de Urabá y en la frontera con Córdoba (alto Sinú y San Jorge).

Este panorama sufre importantes modificaciones a partir de la década de 1980. Las Farc, respondiendo a su ambiciosa estrategia de toma del poder, lanzan una ofensiva política y militar sobre el eje bananero, apelando a la combinación de todas las formas de lucha: movilización social, participación en las elecciones, acciones militares y el inicio de un proceso de diálogo con el gobierno de Belisario Betancur. Fruto de ello es la tregua de 1984 y el impulso de un movimiento político de oposición, la Unión Patriótica, cuyos líderes son víctimas de una labor de exterminio y lo cual, entre otras razones, va a dar al traste con el intento de negociación política del conflicto armado.

Pero hay un elemento adicional que hace aún más complejo el conflicto armado en Urabá: la competencia entre las Farc y el EPL por el control político y militar de la región genera un ambiente de polarización y escalada de las violencias manifiesta en un incremento de los homicidios y masacres que tienen como blanco las gentes que habitan en asentamientos con influencia del EPL o del Partido Comunista y de los trabajadores de las fincas bananeras.

En 1983 se da inicio a la conformación de grupos paramilitares en cabeza de los hermanos Fidel y Carlos Castaño. Su ofensiva se inicia en el norte de Urabá con operaciones de “limpieza” de la base social de la guerrilla,

justificada en aras de contrarrestar los desmanes de que venían siendo víctimas los ganaderos de la región con las constantes *vacunas* (extorsión), y *boleteos* (amenazas). Al finalizar esta década ejercen un control territorial en los municipios de Arboletes, San Juan y San Pedro de Urabá (norte de Urabá) después de haber cometido las masacres de La Mejor Esquina (36 personas asesinadas), de las fincas Honduras y la Negra, y la de Punta Coquitos, cerca a Turbo (Conferencia Episcopal, 2001).

El Estado también hace mayor presencia con el aumento de efectivos, operaciones militares y el nombramiento de alcaldes militares en los municipios del eje bananero. Pero estas medidas no sólo resultan ineficaces, sino que acrean un mayor desprestigio de la fuerza pública ante los atropellos cometidos contra la población y las alianzas con los grupos paramilitares.

Entre 1985 y 1990 se produce un *primer ciclo de desplazamiento*⁴ con epicentro en veredas de Turbo, cuya población se desplaza a los corregimientos de Nueva Colonia, Currulao y hacia el casco urbano de Turbo en donde denuncian la situación que han vivido. Después de pasar días refugiados en improvisados lugares de concentración retornan a sus tierras, pero una vez allí continúan siendo objeto de amenazas, hasta que en 1996 se producen nuevos desplazamientos a raíz de las órdenes de expulsión.

En 1991 se produce la entrega de armas del EPL como resultado de un proceso de negociación que se había iniciado desde el gobierno de Belisario Betancur. Pero en Urabá este hecho de paz va a tener efectos contrarios, pues las Farc y sus Milicias Bolivarianas, así como los disidentes del EPL que no aceptaron

4. Se retoma la caracterización de ciclos de desplazamiento en Urabá contenida en el estudio realizado por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia para el Secretariado Nacional de Pastoral Social (Conferencia Episcopal, 2001).

los acuerdos de paz, comienzan a atacar y asesinar a los reinsertados y a las bases políticas del nuevo movimiento político de los desmovilizados, Esperanza Paz y Libertad. En este contexto los excombatientes del EPL conforman los “Comandos Populares”, que entran en una disputa abierta con la guerrilla de las Farc que seguía activa en la zona (García, 1996) y (Vicepresidencia de la República, 2006).

Entre los años 1991 y 1995 se produce un *segundo ciclo de desplazamiento* que afecta la población de las zonas en disputa. En el norte de Urabá, la ofensiva paramilitar se centra en Necoclí y se traduce en un incremento de asesinatos y desapariciones, en los desplazamientos de población a los corregimientos de las Changas y Pueblo Nuevo (Turbo) y de comunidades indígenas pertenecientes al Resguardo de San Andrés de Sotavento (El Volao, Varasanta y Caracolí)

Ante las amenazas de paramilitares y la guerrilla y el asesinato de su gobernador, estas comunidades se ven forzadas a abandonar sus territorios y a marchar hacia otros lugares. En marzo de 1995 se produce un éxodo hacia la cabecera de Necoclí. Su presencia en el parque de esta localidad hace visible el drama que afrontan y provoca la solidaridad de otras comunidades indígenas pertenecientes a los Emberá Chamíes, Emberá Katíos, Tules, los Kunas pertenecientes al resguardo de Caimán Nuevo (localizado entre Necoclí y Turbo).

Pero el acoso de los actores armados contra la población civil continúa. La consecuencia son nuevos desplazamientos masivos. La población se dirige hacia lugares aún más recónditos en el norte de Urabá (Arboletes), hacia el departamento de Córdoba (Tolú), el eje bananero y la ciudad de Medellín.

La ofensiva paramilitar continúa en otras localidades pertenecientes a los municipios de Apartadó, Chigorodó, Carepa y Turbo, y en las fincas bananeras cuyos trabajadores ve-

nían sufriendo las consecuencias de la disputa entre el EPL y las Farc. Sólo en el primer semestre de 1995 fueron asesinadas 500 personas en el eje bananero. Esto repercute en un incremento de desplazamientos individuales de gentes que habitan las cabeceras. Parte de esta población se dirige hacia regiones aledañas a Urabá y hacia Medellín. En 1996 arriban a esta ciudad unas 15.000 personas provenientes principalmente de cabeceras y veredas de Apartadó y de Turbo.

Este es el momento en que se multiplica la existencia de los llamados *pueblos fantasmas*, ante la salida en masa o de manera paulatina de sus habitantes que dejan abandonadas sus pertenencias. Es la experiencia vivida por los habitantes de varias veredas pertenecientes a los municipios de Turbo y Necoclí (Conferencia Episcopal, 2001).

La conversión del eje bananero en zona en disputa es decisiva en una extensión del conflicto armado hacia el resto del Urabá antioqueño: Mutatá, Dabeiba, Murindó, Vigía del Fuerte y hacia los territorios aledaños que forman parte del medio y bajo Atrato. Lo que está en juego es el control de territorios donde las Farc han tenido un arraigo histórico ligado a colonización y a una influencia electoral demostrada en las votaciones por candidatos de la Unión Patriótica –UP–.

En 1996, los paramilitares replican la estrategia de terror que ya habían puesto en práctica en el norte y en el eje bananero con asesinatos selectivos, órdenes de desalojo y masacres. También el ejército hace lo propio con los bombardeos y los retenes localizados en puntos estratégicos. Así se da lugar a un *tercer ciclo de desplazamiento*, con el predominio de desplazamientos masivos de grupos de población desde veredas de Mutatá (Belén de Bajirá, Pavarandó Grande, Buenavista, Puerto Lleras, Caucheras, Leoncito, La Secreta, La Fortuna y La Raya) y desde el corregimiento de San José de Apartadó, lugar en el cual se da

inicio a la experiencia de la comunidad de paz con una declaratoria de neutralidad, siguiendo el ejemplo de comunidades indígenas.

En este período son particularmente afectadas las comunidades indígenas de Mutatá y Murindó y las pertenecientes a los resguardos de Chontadural Cañero y Jaikerazabi, que ante el asesinato del gobernador Mario Domicó, la ocurrencia de varias masacres y las amenazas de los actores armados para obligarlos a colaborar, se desplazan hacia Mutatá y hacia lugares más recónditos. Ante esta situación la Cruz Roja, la Organización Indígena de Antioquia, la Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado de Paz conforman una comisión humanitaria que recomienda la declaratoria del resguardo indígena de Murindó como zona de refugio y un acompañamiento permanente para garantizar su protección.

Una vez que los paramilitares dan por concluida la “limpieza” de esta zona que consideran bastión histórico de la guerrilla, dirigen su atención hacia Riosucio y los pueblos ribereños del Atrato, particularmente en aquellos territorios que han servido de zona de refugio a la guerrilla de las Farc. Las incursiones de los paramilitares abarcan poblados ubicados en la línea fronteriza con Panamá (Acandí Seco Medio, Seco Arriba y El Cedro) y hacia el sur (Riosucio). Se combinan los bombardeos del ejército con el bloqueo del río Atrato y las masacres, lo que obliga a nuevos éxodos de población que se dirige hacia Quibdó. Estos recorridos de muerte tienen lugar en Domingodó, Curvaradó y por último Vigía del Fuerte, en donde sus habitantes son sometidos a un cerco que afecta a los nativos y a la población procedente de Riosucio y Murindó que también ha llegado en busca de refugio.

Entre 1998 y el 2003 se produce un nuevo ciclo de desplazamiento, el cuarto, que tiene como epicentro el Medio Atrato y el área de influencia de las Farc hacia el occidente y norte de Antioquia, en territorios de importan-

cia estratégica por ser puerta de entrada hacia Urabá y corredores para el transporte de armas y de coca, cuyo cultivo se expande en diversos lugares de la selva chocoana.

A diferencia del norte y el eje bananero, ni los paramilitares ni el ejército logran consolidar un dominio territorial, lo que va a tener una repercusión directa en nuevos flujos de población forzada a desplazarse. Muestra de ello son los eventos de desplazamiento en veredas de Mutatá y en Dabeiba, en Peque e Ituango. Durante el año 2001 se presentaron 11 desplazamientos masivos, de los cuales siete ocurrieron en las riberas de los ríos Jiguamiandó y Salaquí. También se generan desplazamientos individuales hacia Riosucio, Turbo y Cartagena.

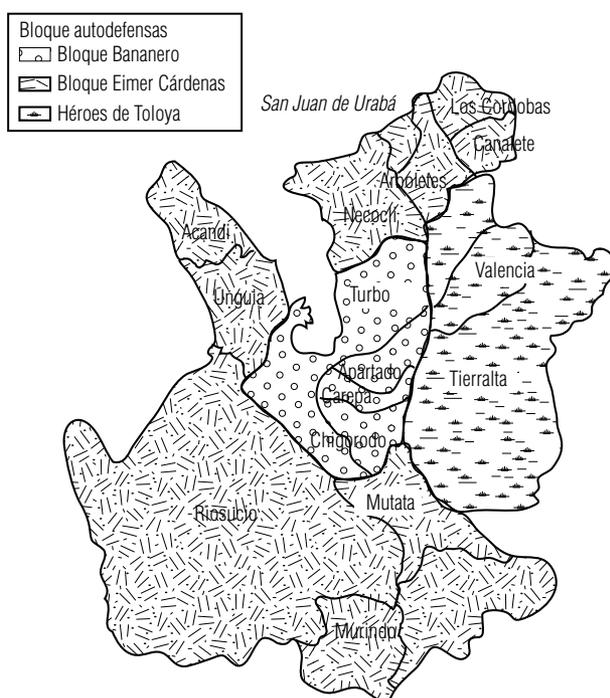
La demostración más palpable de la degradación del conflicto armado y las atrocidades cometidas contra la población es la tragedia de Bojayá ocurrida el 2 de mayo del 2002, cuando 119 civiles murieron en el templo en el cual se habían refugiado, al ser alcanzados por una pipeta de gas lanzada por las Farc en medio de un combate con el bloque Élder Cárdenas de las AUC.

En agosto del 2002, el gobierno de Uribe se inicia con medidas que responden a la nueva estrategia de Seguridad Democrática. En Urabá ello repercute en un incremento de la presencia militar y presiones sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó para que replanteen su negativa a colaborar con la fuerza pública. Pero los integrantes de esta comunidad se mantienen en su posición. En el 2005, el asesinato de tres niños y cinco adultos pertenecientes a esta comunidad que presentaban señales de tortura y mutilación genera una situación de zozobra entre la población, rechazo a la presencia de la fuerza pública y una relación más distante con el gobierno Uribe.

A partir del año 2004 el hecho que ha tenido un mayor impacto en las dinámicas del conflic-

to armado y en el desplazamiento es la desmovilización de los grupos de autodefensa que venían operando en Urabá y en territorios aledaños: el Bloque Bananero, el Bloque Élmer Cárdenas y el Bloque Héroes de Tolová. En la figura 14 se pueden apreciar sus zonas de operación.

Figura 14. Estructura de las autodefensas en Urabá



Fuente: Vicepresidencia de la República. Observatorio de Derechos Humanos (2007).

En el 2004 se produce la desmovilización de unos 447 integrantes del Bloque Bananero; en el 2005, 465 integrantes del Frente Héroes de Tolová, 309 del Frente Costanero del Bloque Élmer Cárdenas y 358 del Bloque Pacífico (Héroes del Chocó), y en el segundo semestre del 2006, 484 del Bloque Élmer Cárdenas (segunda fase) (Gobernación de Antioquia, 2006:44).

Estas desmovilizaciones no han tenido, hasta el momento, un impacto significativo en el desestímulo a la conformación de grupos armados ilegales. Algunos integrantes de los bloques desmovilizados se han visto involu-

crados en la conformación de las Águilas Negras, bajo el mando de un antiguo jefe paramilitar cercano a Vicente Castaño con la participación de desmovilizados del Bloque Bananero y con el propósito de consolidar corredores de transporte de la cocaína al servicio del narcotráfico (Periódico El Colombiano, 2006).

A lo anterior se agrega una estrategia de copiamiento por parte de las Farc de los lugares en donde se han producido desmovilizaciones de estos bloques, lo que se ha traducido en nuevos desplazamientos. Según un reporte reciente del Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la República (Citado en: Gobernación de Antioquia, 2006:85) luego de la desmovilización del Bloque Bananero, en todos los municipios, a excepción de Arboletes, se presenta un incremento en el número de desplazados. Los aumentos más notables se dan en Apartadó con el 117%, Turbo con 77%, San Pedro de Urabá con 72%, Necoclí con 55%, Mutatá con 45%. El miedo se ha vuelto a apoderar de poblaciones que temen ser objeto de represalias por parte de esta agrupación guerrillera y de los atropellos de los nuevos grupos armados en conformación.

Urabá como lugar de expulsión y recepción de población desplazada

Entre 1995 y septiembre del 2005 en Urabá se produce la expulsión de 57.208 personas. En la tabla 4 se puede apreciar su distribución por municipio.

Tabla 4. Expulsión de población desplazada en Urabá 1995 septiembre 30 del 2005

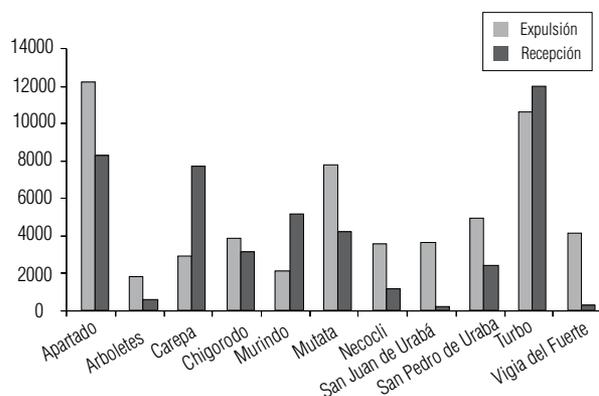
REGIÓN	MUNICIPIO	POBLACIÓN EXPULSADA
Urabá	Apartadó	12.160
Urabá	Arboletes	1.763
Urabá	Carepa	2.853
Urabá	Chigorodó	3.799
Urabá	Murindó	2.087
Urabá	Mutatá	7.757
Urabá	Necoclí	3.565

Urabá	San Juan de Urabá	3.599
Urabá	San Pedro de Urabá	4.933
Urabá	Turbo	10.593
Urabá	Vigía del Fuerte	4.099
Total Urabá		57.208

Fuente: Acción Social - SUR. Proyectó Equipo Restablecimiento. Tomado de: Gobernación de Antioquia, 2006

Esta distribución es demostrativa de la afectación de la población residente en los municipios del eje bananero y en territorios que adquieren importancia geoestratégica en la disputa territorial, Mutatá y Vigía del Fuerte⁵. En la medida que la confrontación armada se generaliza en la región, las cabeceras municipales empiezan a cumplir una importante función como receptoras de población forzada a desplazarse, procedente de las áreas rurales y territorios vecinos a Urabá en los departamentos de Chocó y Córdoba. En la figura 15 se aprecia la relación expulsión/recepción.

Figura 15. Desplazamiento en el Urabá



Fuente: Acción Social. Sistema Único de Registro, 2005.

Mientras que los municipios del eje bananero expulsan y reciben población, el norte de Urabá (Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá) y hacia el sur (Vigía del Fuerte) se confirman como lugares expulsores.

Un sondeo realizado por instituciones con responsabilidades en la atención a población desplazada en Urabá (Zuluaga, 2006) arroja el siguiente balance con respecto a las rutas del

desplazamiento en la región y algunas características de la población.

Los pobladores desplazados en Mutatá provienen de distintos corregimientos y veredas pertenecientes a este municipio (Pavaranadó, Caucheras, Pavarandocito) y de Dabeiba hacia el occidente antioqueño. La gran mayoría de las familias desplazadas se ubican en el barrio de invasión Las Carpas, actualmente denominado El Porvenir. Muy pocas familias se encuentran fuera de este barrio y aquellas que lo han hecho viven con sus familiares en el casco urbano. En el área rural se encuentran algunas que han ocupado casas y fincas de otros desplazados fuera de la región. También se observa la presencia de familias que se han asentado en la zona rural de Bajirá, luego de la desmovilización del bloque Élmer Cárdenas y que provienen de anteriores territorios ocupados por las autodefensas y ahora en disputa con las Farc.

En Chigorodó, la población desplazada está compuesta mayoritariamente por pobladores afrocolombianos provenientes del Chocó (Caño Manso, Brisas, Cuenca del Truandó y Salaquí), de algunos mestizos (Saiza) y últimamente de Dabeiba. La población desplazada se ubica en los barrios La Castellana, Brisas y Centro. Se trata de familias extensas, principalmente choconas y con fuerte arraigo religioso (evangélico).

En Carepa la mayor parte de la población desplazada proviene de Saiza, corregimiento de Tierralta perteneciente al departamento de Córdoba. Es una población con un ascendiente paisa, son mestizos descendientes de colonos de distintos municipios de Antioquia, de vocación agrícola y campesina. Se han ubicado en los asentamientos (Acadaima 1 y 2, el parque y la vereda La Petrolera) y los compar-

5. Se debe tener en cuenta que esta cifra comprende tanto los habitantes de la cabecera como de las áreas rurales.

ten con desplazados provenientes en menor número del Chocó.

En Turbo, la población es mayoritariamente chocoana, proviene de las cuencas y comunidades del medio y bajo Atrato y del norte de Urabá. Es el municipio que cuenta con el mayor número de población desplazada y el que mayores deficiencias en la atención y condiciones de vida presenta. Los asentamientos se encuentran en los barrios El Bosque, La Lucila, La Playa, Cadena las Playas, Obrero y Arquidiócesis de Manizales.

Apartadó es, junto con Turbo, el principal polo de atracción de población desplazada, lo que se explica por su dinámica económica, su ubicación equidistante de lugares en donde se producen eventos de desplazamiento, la existencia de los denominados *barrios de invasión* en donde reside población con vínculos familiares y de paisanaje con los que llegan en busca de refugio y oportunidades de vida. Sin embargo, su nivel de desarrollo no se ha traducido en un mejoramiento de los índices de calidad de vida de la población que en su mayoría pertenecen a los estratos 1 y 2, correspondientes a los grupos de población más pobre, que no logra ser atendida en sus necesidades básicas de vivienda, salud, alimentación. El municipio de Apartadó, según los datos del censo del 2005, cuenta con una población de 103.170 habitantes, de los cuales un 83% están localizados en la cabecera municipal y un 17% en el área rural (Cmaipdv, 2006:28).

Según estadísticas de Acción Social Urabá, la mayor parte de la población desplazada en Apartadó es femenina y con predominio de las mujeres adultas, mientras que entre la población masculina la mayor parte corresponde a menores de edad. Para el año 2006, según datos del programa de Familias en Acción, se pudo establecer que de las 1.490 familias inscritas en el Sistema de Información de la Población

Desplazada –Sipod–, la mayor parte manifiestan tener hogar con presencia de padre y madre, aunque es significativa la existencia de hogares en donde el jefe de hogar es la mujer.

La presencia de esta población ha contribuido de manera significativa a un aumento de la población vulnerable y de las zonas marginales en Apartadó. De acuerdo con una encuesta realizada con las familias inscritas en el programa Familias en Acción, la población desplazada se localiza en unos 27 barrios, con una concentración en los barrios Veinte de Enero (792), Policarpa (193) y el Obrero (843) que en años anteriores se convirtieron en territorios en disputa por parte de las Farc, el EPL y las Autodefensas (Programa Familias en Acción. Citado en: Cmaipdv, 2006)

Condiciones de vida de la población desplazada en Urabá

Según un reciente diagnóstico social presentado por la Alianza Pilas-Atención a Desplazados y Grupos Vulnerables (2006), el 75% de la población desplazada en Urabá se encuentra en condiciones de miseria al carecer de más de una necesidad básica.

El ingreso promedio mensual de los hogares desplazados es equivalente al 77% de un salario mínimo vigente (\$408.000) y es 90% menor al que requieren para cubrir sus gastos básicos. Esta es la principal causa de inseguridad alimentaria. El 96% de los hogares desplazados no alcanzan a adquirir los productos de la canasta familiar básica. En promedio un miembro de cada familia deja de consumir una comida. La principal opción para generar ingresos es el *rebusque*, término comúnmente utilizado para referirse al desempeño en actividades tales como recicladores de basura o vendedores ambulantes.

En el tema de vivienda, cerca del 84% se encuentran construidas con materiales inapropiados y servicios inadecuados. La vivienda es

la principal necesidad, seguida del abastecimiento continuo de agua potable y el suministro de alimentos. También hay una alta inasistencia escolar en todos los grupos de edad, especialmente entre los 16 y 17 años (53,2%).

En Apartadó, la situación no es menos crítica. Señala el diagnóstico social contenido en el Plan Integral Único para la atención a la población desplazada en este municipio que las condiciones de vida son bastante precarias.

En salud hay una baja cobertura en el área rural y en el municipio, y la calidad de los servicios es muy deficiente, lo que afecta de manera importante a los menores de edad que presentan un tabla de enfermedad diarreica aguda e infecciones respiratorias.

En el campo educativo, además de los problemas de ausentismo, se acusa una deficiencia en mínimos procesos de inducción y adaptación al sistema escolar y en la no atención debida a los trastornos que se han detectado en los niños(as): problemas de tipo afectivo, somático y perceptual-cognitivo relacionados con la experiencia del desplazamiento.

Hay una baja cobertura en programas de seguridad alimentaria y nutricional para población desplazada, y ausencia de proyectos productivos viables y sostenibles que generen ingresos.

Las viviendas que se han construido y entregado a la población no gozan de suficiente espacio para la libre movilidad, además de ser un factor generador de estrés, ansiedad. Se carece de banco de tierra para construcción de vivienda, por falta de lotes y recursos para comprarlos.

Implementación de la política de atención a la población en situación de desplazamiento en Urabá

La elaboración del primer Plan Integral Único –PIU– para la atención a población en situación de desplazamiento por la violencia en el municipio de Apartadó representa

un avance en la elaboración de una política que consulte la realidad de la región. En dicho plan se definen las metas a cumplir en cinco líneas de acción (prevención y protección, asistencia humanitaria, restablecimiento socio-económico, reparación, participación y organización) para dar respuesta a las necesidades de esta población y contribuir a la rectificación de un enfoque asistencialista por parte de las instituciones y organizaciones sociales posterior a la fase de emergencia, políticas locales y proyectos de bajo impacto que no generan ingresos en la población desplazada y poco e insuficiente recurso humano (Cmaipdv, 2006:63).

En el Comité Municipal de atención a la población desplazada en Apartadó participan Acción Social Regional Urabá, Dapard, Administración Municipal de Apartadó, Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Defensoría del Pueblo, Sena, Personería Municipal, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Corpourabá, Hospital Antonio Roldán Betancourt, Incoder, Policía Nacional, Ejército Nacional y las organizaciones de desplazados Villa Hermosa, Asocedea y Cordeu.

En Urabá ha habido una presencia de entidades internacionales cuya labor ha sido fundamental en la atención de emergencia a población desplazada, en la defensa de sus derechos y en el impulso a procesos de organización, mejoramiento de la calidad de vida en los lugares de recepción y acompañamiento a experiencias de retorno. Se destacan entidades tales como Acnur (cuya operadora en Urabá es Opción Legal), Organización Internacional para las Migraciones –OIM– y Comité Internacional de la Cruz Roja –Cicr–, Oxfam y Médicos sin Fronteras.

La elaboración del PIU (Plan Integral Único de atención a la población desplazada) ha sido posible por la iniciativa desplegada por la gobernación de Antioquia por medio del Co-

mité Departamental de atención de población desplazada en la asesoría y acompañamiento, y en la definición de una política de alcance estratégico para la atención a la población en situación de desplazamiento en el departamento contenida en la Ordenanza N° 06 de 2006 para la protección, reconocimiento y reparación de los derechos de la población afectada por el desplazamiento forzado por la violencia en el departamento de Antioquia.

La experiencia del desplazamiento

A continuación se presenta una síntesis preliminar de los principales hallazgos investigativos surgidos del trabajo de campo que se desarrolló en Urabá durante el primer y segundo semestre del 2006 y que involucró directamente a población desplazada de Urabá residente en los municipios de Turbo, Apartadó, Chigorodó y Mutatá y en Medellín.

La aproximación a esta experiencia se basa en la realización de talleres de memoria, entrevistas en profundidad, visitas de campo, asistencia a eventos y recorridos por varios municipios. En los dos talleres de memoria realizados en Apartadó participaron 22 personas, 16 hombres y 15 mujeres. En Medellín participaron 5 hombres. Se realizaron 7 entrevistas a profundidad, 4 en Urabá y 4 en Medellín. Esto nos ha permitido un rastreo de los miedos experimentados en los lugares de expulsión y recepción, las modalidades del desplazamiento, los desafíos y las dificultades que afrontan en los lugares de recepción, los modos como la memoria se actualiza en el nuevo entorno, sus visiones de futuro y acerca de los modos como hombres y mujeres interpretan el proceso vivido hasta el momento.

La población con la cual se estableció relación presenta las siguientes características: su desplazamiento se produjo entre los años 1997 y el 2002. Proviene de lugares epicentro de los

desplazamientos en la región: Apartadó, Chigorodó, Turbo, Mutatá, Riosucio, Carepa y de las localidades de San Pedro de Urabá, Jiguamiandó, Curvaradó, Domingodó, Pueblo Bello Quebrada de Los Indios, La Arenosa, Caño Seco, Barranquillita, San José de Apartadó, Pavarandó Grande, Leoncito, Belén de Bajirá y Saiza. Todos estos lugares fueron blancos directos de las acciones de los grupos armados dando lugar a desplazamientos masivos e individuales.

Se trata en su mayoría de personas adultas, entre los 40 y 50 años, todos padres y madres de familia, y es sobresaliente la presencia de mujeres viudas. Todas se desplazaron con los hijos y en algunos casos con padres y familiares.

Lo predominante, en cuanto a la experiencia vivida con el desplazamiento es una combinación entre desplazamiento individual y participación en éxodos (Riosucio, Saiza). Entre los participantes se cuenta con la presencia de personas que forman parte del la proceso de retorno hacia Saiza.

Las actividades a las cuales se dedicaban los hombres antes del desplazamiento eran el cultivo de maíz, yuca y plátano, la pesca; también trabajaban como jornaleros en fincas de terratenientes y en las bananeras; en oficios varios: mecánicos, latoneros, marqueteros, cantineros y vendedores, entre otros. Las mujeres trabajaban en las faenas del campo y también tenían a su cargo las labores domésticas y la atención de los hijos. El nivel de instrucción, para hombres y mujeres, es de algunos años de primaria. Entre los participantes hubo una mujer con estudios universitarios.

En cuanto a su composición étnica, predominan las personas pertenecientes a comunidades afrocolombianas, también hay mestizos y mujeres indígenas. La mayor parte de las personas participantes en los talleres de memoria en Urabá se conocían entre sí, dada su pertenencia a organizaciones de población desplazada que cuentan con el acompañamiento de Opción Legal.

Los miedos experimentados

El reconocimiento del miedo como un factor preponderante en su desplazamiento se asocia a, lo que en las palabras de uno de los participantes de los talleres es la llegada del “conflicto armado de verdad”. Aunque no se desconoce que la violencia “siempre había estado ahí”, se considera que la situación actual es muy distinta a la de antes porque se trata de varios “grupos armados al margen de la ley peleándose unos contra otros”, quedando ellos como población acorralada entre varios fuegos.

La referencia al miedo adquiere otras connotaciones cuando se trata de reconstruir la experiencia vivida por cada una de las personas. Dado el carácter de síntesis de esta elaboración, se hará referencia a aquellos motivos y circunstancias a los que de un modo más explícito se hizo alusión en los talleres de memoria.

Lugares marcados

El lugar en el que se vivía es identificado como el motivo que obligó a salir, por el hecho de habitar *lugares marcados*. Como lo explica una mujer desplazada de una vereda de Turbo:

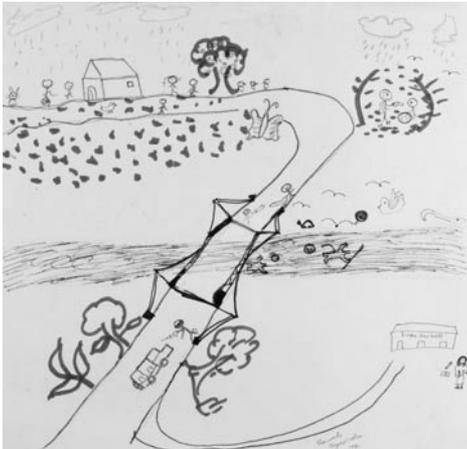
Eso por allá era pura zona guerrillera, se metía el ejército averiguando a los campesinos que estaban por allá que si habían visto algo raro, que tales, que guerrilleros y vainas, y uno no se metía en eso, uno no... yo no he visto nada. Cuando decidieron hacer su masacre y hacer que la gente se desplazara de allá, se metieron, iban cogiendo a la gente, los iban estrujando y revisando si tenían armas, si tenían muestras de morrales porque como los guerrilleros andan con morrales a la espalda, el que tuviera una marca, alguna señal, de una vez iban mochando cabezas y de una, así. Fueron muchos los campesinos que mataron por eso y el ejército hacía presencia de vez en cuando (Taller de Memoria con mujeres desplazadas en Urabá, abril del 2006).

Este testimonio es revelador no sólo del estigma que recae sobre el lugar, sino también sobre aquellos cuerpos que presentan ciertas marcas que, según los victimarios, ponen al descubierto su pertenencia a la guerrilla. Pese a las explicaciones de las mujeres acerca de cómo el cargar un morral era lo acostumbrado por los hombres que a diario se iban al monte a cultivar la tierra, fueron asesinados. También en estos lugares irrumpían hombres armados que se llevaban a los hombres que estuvieran por ahí en la calle “dizque para interrogarlos y muchos no volvían porque los mataban y después los tiraban al hueco para que no dijeran nada”.

Otro factor que motivó la salida fue el desalojo de sus tierras que eran tan fértiles, en donde se podían cultivar tranquilamente el plátano, la yuca y el maíz hasta el día en que “algunos” se interesaron por quedarse con lo suyo. Así fue como un hombre desplazado de San Pedro de Urabá empezó a vivir en medio de presiones y amenazas hasta que “no hubo más remedio que vender, nosotros no podíamos tener esa parcela y nosotros con miedo tuvimos que vender eso por lo que fuera, salir de ella”. Este testimonio es ilustrativo de la forma como se despojó de sus tierras a pequeños propietarios que quedaron a merced de particulares beneficiados con el ambiente de terror imperante y con el accionar de los grupos paramilitares.

La relación entre miedo y lugar se pone en evidencia cuando se hace memoria de la experiencia vivida en lugares de tránsito obligado —puentes, carreteras, caminos— que se convierten en trampa mortal para la población. En la figura 16 se puede apreciar la representación que una mujer indígena de Mutatá realiza sobre los hechos atroces que tenían lugar en el puente entre Pavarandó Grande y Mutatá.

Figura 16. El puente de la muerte



Fuente: Taller de Memoria mujeres desplazadas en Urabá, abril del 2006.

(...) Es que el sólo hecho de pensar que había que pasar este puente era el *pánico* más inmenso. Mejor dicho: si uno se hubiera podido vestir de cobre o de plata, uno se hubiera vestido. Cuando uno venía acá encontraba la fila de los carros y la gente ahí, mirando a ver a quién señalaban para poderlo bajar, descabezarlo y tirarlo al río. El ejército se apostaba en un lado y los *paracos* (paramilitares) en otro, no había escapatoria. Y ¡ay del que se atreviera a buscar a nadie! Fueron muchas las personas que murieron, pero no sólo por ser guerrilleros, sino simple y llanamente porque eran personas que salían con un kilo o una libra de oro que extraían de una mina en una vereda que queda como a cinco horas de Pavarandó Grande. Entonces ya ellos miraban también quién salía con plata para robarle (Mujer, Taller de Memoria con mujeres desplazadas en Urabá, abril del 2006).

El terror que se experimenta tiene que ver con lo que hacen tanto los grupos ilegales como el mismo ejército y también con la percepción de una arbitrariedad cada vez mayor, al proceder al asesinato no únicamente de los ya previamente incluidos en sus listas, también de cualquier

otra persona a la que se considera en el momento que debe ser asesinada y arrojada al río.

Las muertes cercanas

En la narración de los miedos experimentados es relevante la alusión a las atrocidades cometidas contra personas cercanas a sus afectos. Las mujeres son las que toman la iniciativa para hablar de los *asesinatos de hombres solos o en grupos* y cuyos cuerpos se dejaban tendidos en la carretera o en las puertas de las casas. Al evocar estos episodios se enfatiza que se trataba de personas “que no debían nada”, pero que fueron incluidas en una lista o señaladas. Algunas mujeres residentes en asentamientos de Apartadó y Chigorodó manifiestan el temor que sentían al tener que saltar por encima de los cadáveres y por la posibilidad de “ser investigadas” y “una sin saber qué iba a responder, mejor decir ‘no sé, no vi’, ¿cierto? Bueno, una zozobra siempre, todos los días”. Aunque hacían todo lo posible por no volver a pensar en los muertos, el encuentro con familiares que llegaban procedentes de otros lugares de Urabá en donde estaban ocurriendo asesinatos y masacres se los impedía.

La cercanía con las personas asesinadas no se convierte en una razón lo suficientemente poderosa para salir desplazados; para abandonar el lugar por lo general es necesario que se produzcan otros eventos identificados como un riesgo inminente para sus propias vidas. Esta es, por ejemplo, la experiencia de varios hombres y mujeres desplazados de Mutatá y Chigorodó que aunque ya habían visto salir a otras familias se habían negado a hacerlo, hasta el momento en que los soldados empezaron a decir: “¡Ay! nosotros siquiera somos formales con ustedes, pero van a llegar unos más bravos, pa’ que les tengan miedo, dizque unos *mochacabezas*, que cuando lleguen va a ser horrible, miren que van a llegar, les van a mochar la cabeza, los van a coger, los van a amarrar” y así sucedió.

Una mujer desplazada de una vereda de Chigorodó recuerda cómo en las horas de la noche empezaron a llegar personas armadas desconocidas tocando, entrando y sacando a la gente. Ella decide guardar silencio y quedarse quieta con su hija, “esperando a que se les atravesara un buen pensamiento que los hiciera marcharse”. Al clarear el día descubre con horror que se llevaron a su cuñada dejando dos bebés pequeños abandonados y “ahí sí no quedó más que salir a la carretera sin nada que llevar y coger el primer bus”. Ella se dirige a la casa de una amiga en la vereda Cestillal (Cañasgordas) de donde un tiempo después se desplaza hacia Medellín.

Al intercambiar impresiones sobre estas situaciones límite, hay quienes se atreven a nombrar el miedo profundo que les producía el llegar a ser confundidos con guerrillos o paracos *sin serlo*, simplemente por haber tenido un *contacto* con la guerrilla, “por haberle tenido que prestar algún servicio” o “por la costumbre de brindarle un vaso de agua al que transitaba por allí, y sin tener que ponerse a averiguar de quién se trataba” o por toparse con ellos monte adentro cuando se iba a cultivar la tierra.

Esta situación no es exclusiva de las áreas rurales, también se presentó en las zonas urbanas, en particular con algunas personas que en razón de su oficio eran demandadas por uno u otro actor, lo cual las colocó en una sin salida. Es la historia de un hombre desplazado de Chigorodó que empezó a ser *mal visto* por la gente, a ser considerado un *oído*.

Un oído pa’ usted no es como por decir un sapo, como hoy en día aquí en la ciudad es un sapo. No, un oído es una persona que conoce todo de pie a cabeza, de ángulo a ángulo, pero que no pasa de ahí, sino conocedor. ¿Ya me entendió? Conocedor, pero no se mete con nadie, entonces eso se llamaba en ese tiempo (1997) un oído

(Entrevista, hombre desplazado de Urabá en Medellín, mayo del 2006).

La diferencia con el *sapo* estriba en que: El que llamamos sapo es aquel que le dice: “Vea, ese fue guerrillo” o “ese mató a fulano allá” o “ese tal cosa”. El *lambón* es el que anda detrás, pero no le dan autoridad de nada ni conoce bien cómo está la pomada, como dice el dicho, simplemente se hace una amistad con usted y anda pa’riba y pa’bajo y simplemente ya la gente: “¡Ay! ese también es de esos”, pero mentira que es un *lambón*, que es muy diferente (Entrevista, hombre desplazado de Urabá en Medellín, mayo del 2006).

La existencia de estas figuras calificadas de colaboradoras o potencialmente colaboradoras del enemigo pone en evidencia los niveles de desconfianza a los cuales se llega entre la población, en la que “no se sabe quién es quién”, lo cual hace más imposible la convivencia cotidiana con personas cercanas que fácilmente se pueden convertir en los peores enemigos.

En la medida en que el conflicto se extendía se hacía más difícil ser neutral, como observa un hombre desplazado de Jiguamiandó:

Cuando el conflicto fue aumentando, la situación se tornó crítica porque el que no estaba metido estaba sujeto a recibir órdenes, porque si hay una persona que esté en una vereda, por decir algo, y llegó la guerrilla y le pidió un servicio, la persona así sea o quiera ser neutral si no se lo hace de pronto pueden terminar la vida de él. Y si llegan los paramilitares también le sucede lo mismo. Y si llega el ejército le puede suceder lo mismo. Entonces ¿qué quiere decir?, que cuando uno, cuando esa persona no le sirve a cualquier actor armado es porque está confabulado con el otro (Taller de Memoria con hombres desplazados en Urabá, abril del 2006).

Esta apreciación da lugar a intercambio de opiniones en los talleres y en él sale a relucir el problema que se generó para las comunidades con la vinculación de algunas personas, en especial los jóvenes a la guerrilla, con el agravante de que algún tiempo después muchos de ellos retornaron sembrando el terror, “señalando a toda cuanta persona se les ocurría como colaborador de la guerrilla”, obligando a las personas señaladas a desplazarse para salvar la vida.

La salida

La decisión de desplazarse de manera individual, por lo general, se produce después de la ocurrencia de un evento que lleva al límite la posibilidad de permanencia. Las mujeres tienen un papel fundamental en la planeación de la salida, de tal manera que todo parezca algo natural, sin que nadie llegue a pensar que se van del todo “porque deben algo”. En el mejor de los casos se lleva algún dinero y una “muda de ropa”. A pesar de que se hace gran esfuerzo por no dejarse dominar por el miedo, sólo cuando se logran subir al primer bus que pasa se experimenta una sensación de alivio, aunque se permanece en gran tensión porque se sabe que en cualquier momento los armados puede montar su retén, “bajar a toda la gente y matar al que quieran”, pero la fe en Dios y la tranquilidad de conciencia de “no haberse metido con nadie” ni estar “quemadas” les ayuda a salir con vida y llegar al lugar para ponerse a salvo, definido muchas veces sobre la marcha.

En cuanto a los desplazamientos masivos, la participación en los talleres de memoria de hombres y mujeres que hicieron parte de los éxodos de Riosucio y de Saiza permite aproximarse a esta experiencia.

Riosucio es un municipio perteneciente al departamento del Chocó, pero con una cercanía a Urabá por la interconexión con Pavarandocito, Pavarandó y con Mutatá, lo cual ha fa-

cilitado un ir y venir de población, principalmente de origen afrocolombiano, proveniente de las riberas de los ríos san Juan y del Atrato, del sur del Chocó, Cauca y del Valle del Cauca, y de mestizos expulsados de sus tierras en los departamentos de Antioquia, Sucre y Córdoba (Comisión Interclesial de Justicia y Paz, 2005).

Buena parte de esta población habita una extensa área selvática que ha adquirido una importancia como un polo de desarrollo para la explotación de sus recursos naturales, el desarrollo de la industria camaronera y el aprovechamiento de sus fértiles tierras para la explotación de la palma africana. La ejecución de estos ambiciosos proyectos encuentra un obstáculo en la presencia de comunidades que para comienzos de la década de 1990 logran el reconocimiento de su propiedad colectiva sobre la tierra, con la aprobación de la Ley 70 de 1993, y avances importantes en procesos organizativos y la experimentación de modelos alternativos de aprovechamiento de los recursos naturales, con protección de los ecosistemas y la preservación de su cultura (Rolland, 2005).

La ofensiva paramilitar tenía el propósito de remover el obstáculo que representaba la presencia de estas comunidades y asegurar el control sobre estos territorios. El despliegue de los métodos de terror puestos a prueba en otras regiones del Urabá se combina con maniobras por parte de las compañías de explotación de palma africana, en los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó, destinadas a la compra a gran escala de títulos: contratos fraudulentos, la celebración de convocatorias a foros y acuerdos multilaterales con participantes que suplantán a los representantes legales de comunidades (Comisión Interclesial de Justicia y Paz, 2005).

El éxodo de Riosucio se inicia en el segundo semestre de 1996 a raíz de la ofensiva del bloque Élmer Cárdenas y los operativos militares llevados a cabo por la fuerza pública (Operación Génesis al mando del general Rito Alejo

del Río) y los enfrentamientos con los frentes 57 y 34 de las Farc que venían operando en la región. Así se produce la salida de los pobladores de Truandó, Salaquí, Curvaradó y Jiguamiandó. Pero esto no es sino el comienzo de una serie de desplazamientos masivos que continúan con intensidad en los años 1997, 1998 y 1999.

En el primer semestre de 1997 unos 4.000 campesinos se vieron forzados a desplazarse. Una parte de ellos se dirigió hacia Cartagena, Medellín, hacia Turbo-Panamá y hacia el municipio vecino de Pavarandó como escala hacia Mutatá; pero también algunos decidieron quedarse en sus territorios escondidos en medio de la selva y en las montañas del Jiguamiandó. La población que participa en los talleres de memoria hizo parte de este éxodo que se produce entre los meses de febrero y marzo de 1997.

“Estampida”, “salida en masa”, “en manada” son los términos que se utilizan para describir la experiencia vivida. Ante la noticia de la inminente llegada de los *mochacabezas*, sin pérdida de tiempo se congregan hombres, mujeres, niños, abuelos y se da inicio a una marcha a la que se van sumando gentes de otras veredas cercanas que huyen de los enfrentamientos entre guerrillas y autodefensas.

Durante la marcha las mujeres se encargan de no perder de vista a los hijos, auxiliar a mujeres que dan a luz, ayudar a enterrar a personas que mueren en el trayecto. Los hombres se ponen al frente, orientando la marcha y dando la orden para esconderse para poder eludir los disparos desde los helicópteros del ejército.

Después de varios días de marcha arriban a Pavarandó en donde reciben ayuda humanitaria por parte de la Cruz Roja. Las autoridades locales en acuerdo con el general Rito Alejo del Río, comandante de la XVII Brigada en Urabá, disponen su ubicación en el coliseo municipal, la idea era impedir que continuaran su marcha hacia Mutatá. Como recuerda un hombre desplazado de Jiguamiandó, aún cuando les

daban alimentos les impedían salir: “No nos dejaban salir a ninguna parte a conseguirnos un día de trabajo para comprar lo que necesitábamos”. Esto los hacía sentir humillados y con mucho miedo: “Hasta para salir al río teníamos que ir manadas de gente acompañándonos unos a los otros y eso mismo no lo deseo a nadie más, que le toque un caso de esos”.

Algunas personas, entre las cuales se cuentan algunas parejas participantes en el taller de memoria, se deciden a abandonar el coliseo. Los hombres se dirigen a Chigorodó y Apartadó en busca de trabajo. Las mujeres, por su parte, permanecen a la espera con los hijos. Este es un momento que se recuerda con mucha angustia por el temor de que no retornaran. Transcurridos algunos meses por fin se pueden reunir y buscar un lugar más estable en las cabeceras de municipios del eje bananero.

La población que permanece en el coliseo, y que es la mayoría, después de varios meses de estadía al no lograr las debidas garantías para su retorno se dispersa en varias direcciones. Un grupo se dirige hacia Turbo y Puerto Obadía en Panamá, otras se ubican en asentamientos de población desplazada en la cabecera de Riosucio, pero también hay quienes se deciden a retornar.

En el éxodo de Saiza, corregimiento perteneciente al municipio de Tierralta, se forja otro tipo de experiencia que tiene como protagonista una comunidad campesina con un fuerte sentido de pertenencia y una historia compartida ligada a la colonización y a la violencia política de los años 50 y 60 al ser escogida la región de Tierralta como zona de operaciones de la recién creada guerrilla del EPL. Aunque la ofensiva del ejército logra dismantelar este intento, hacia los años 70 y 80 se produce la llegada de las Farc y del ELN.

Al promediar los años noventa Saiza se convierte en un zona en disputa entre guerrilla y paramilitares. Los asesinatos selectivos

de personas del lugar y las amenazas contra la población se hacen más frecuentes, hasta que la masacre del 14 de julio de 1999, en la que se produce la quema de gran parte del comercio y viviendas y una orden terminante de desalojo por parte de las AUC, obliga a un desplazamiento masivo de sus habitantes hacia diversos lugares del Urabá, principalmente hacia Carepa, municipio cercano a Saiza, y con el cual se ha construido una estrecha relación comercial.

No obstante la dispersión de los habitantes de Saiza en diversos lugares de Urabá, se logran mantener unos vínculos de mutua cooperación. En la medida en que la violencia cede un poco va tomando fuerza la idea de retorno que se empieza a producir de forma individual y silenciosa, hasta que en el 2005 se cuenta con el apoyo de diversas instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y de Acción Social. Para el 2006 se había producido retornos de población en 23 de sus 26 veredas. Sin embargo, como se verá más adelante, entre la población se albergan temores frente a un recrudecimiento del conflicto armado y nuevos desplazamientos.

La experiencia de la población en los lugares de recepción en Urabá

La elección del sitio de destino depende de la localización de familiares o vecinos que residen en piezas alquiladas o en ranchos ubicados en los asentamientos donde se ha venido instalando la población desplazada. Pero también hay quienes manifiestan que les correspondió llegar a “un principio de un barrio de invasión a armar un rancho con algunos palos y unos plásticos”. Así le tocó vivir por dos años a una mujer desplazada de la vereda Leoncito, hasta que resultó beneficiada con una vivienda en un proyecto impulsado por las Hermanas Lauras.

En cuanto al primer tiempo de estadía, la adaptación al lugar puede oscilar entre algunos

meses y hasta dos años. Se coincide en señalar que al principio fueron muy bien recibidos, a pesar de las incomodidades. Pero este ambiente de acogida dura poco ante las discordias por la repartición de recursos escasos y las humillaciones a las que son sometidos. Esta situación se hace más difícil de sobrellevar para las mujeres, puesto que ellas son las que permanecen en el lugar y porque no han logrado reponerse de un estado de tristeza y un desgano: “Es que no provocaba ni salir a la puerta”. Pero el imperativo de sobrevivencia y la necesidad de velar por los hijos “lo empujan a uno a salir adelante”.

El reconocimiento del lugar en el cual se encuentran reaviva los miedos experimentados en los lugares de expulsión. Es lo que han vivido las personas que llegan a las cabeceras de los municipios del eje bananero entre los años 1997 y el 1999, momento en el que se libra una disputa por el control de estos territorios. Varias mujeres manifiestan el impacto que les produjo el constatar “que la gente de un barrio no podía pasar a otro porque la mataban, que a las seis de la tarde ya no se encontraba un alma en la calle porque el que encontrarán ya no respondían por él”.

Al comparar la zozobra que se vivió en este tiempo con la situación actual se considera que las condiciones de seguridad han mejorado en los asentamientos. Sin embargo la presencia de un nuevo actor en la región, los desmovilizados, es vista con preocupación por la amenaza que puede representar para la población desplazada.

(...) Ahora luego de que estos grupos al margen de la ley se entregaron, ahora ya la cosa está como volviendo nuevamente a sentirse el mismo miedo que cuando una se desplazó, porque ya esta gente está en los asentamientos donde estamos viviendo nosotros. Esta gente anda robando, anda matando por cualquier cosa, ya uno anda con miedo, ya le da hasta miedo salir a rebuscarse a trabajar, porque la cosa está muy

dura ahorita. Se está sintiendo el mismo miedo de cuando el 96-97 que ya la gente no salía ni siquiera de su casa por temor que lo fueran a matar casi por ningún motivo (Conversatorio con hombres y mujeres desplazados en Urabá, noviembre del 2006).

Los “grupos al margen de la ley” a los cuales se hace mención son los desmovilizados, con quienes el gobierno de Uribe pretende “mezclarlos” “sabiendo que somos diferentes” y que los han visto que continúan armados, “ya los va a ver usted en el pueblo como legalizados, pero en el día son una cosa y en la noche son otra”. ¿Qué va a ser de ellos teniendo que convivir en estas condiciones tan desventajosas? es la pregunta que ahora se hacen y que actualiza miedos vividos con el desplazamiento.

Para las personas desplazadas que residen en Mutatá, la inseguridad es atribuida al ejército, que no ha podido cambiar su actitud hostil hacia los desplazados al seguir considerándolos colaboradores de la guerrilla. Además las frecuentes *batidas* (redadas) generan un rechazo por perjudicar a personas “que nada tienen que ver” con su detención.

Estrategias de supervivencia

Los relatos sobre sus condiciones de vida coinciden con los diagnósticos a los cuales se hizo alusión en el apartado anterior. Aquí lo importante es la significación que el vivir en condiciones de extrema pobreza reviste para las personas desplazadas que insisten en la apreciación del contraste con la situación en la que se encontraban antes de ser desplazados.

En el medio urbano en el que ahora se encuentran, cabeceras de los municipios de Turbo, Apartadó, Chigorodó y Mutatá, no tienen las mismas posibilidades de cultivar la tierra. Tampoco los hombres consiguen empleo, como ocurría antes, en las fincas bananeras. Entonces ¿qué queda por hacer? se preguntan, “pues ir al rebusque y arriesgarse a salir a lu-

gares cercanos a cultivar yuca, plátano, maíz”. Así es como los hombres logran aportar algo a la subsistencia de la familia y han podido mantener un vínculo con la tierra y un nivel de autoestima que les permite sentirse útiles y no tener que pasar “por la humillación de pedir limosna ni que les regalen el banano de desecho (“voleja”), después de haber tenido a su disposición todo lo que necesitaban para alimentarse en su propia tierra.

En las mujeres si bien hay una continuidad en el desempeño de labores domésticas y el cuidado de la familia, el esfuerzo que ello demanda es mucho mayor por las condiciones de hacinamiento, no tener donde tender la ropa o la falta de agua. Al igual que los hombres, hacen averiguaciones sobre las posibilidades de empleo, pero el que han podido conseguir es en el servicio doméstico, oficio en el que manifiestan se han sentido muy mal por las humillaciones, el no pago justo de su trabajo.

En contraste con los hombres, la educación, un asunto que dejaron de lado por dedicarse al cuidado de los hijos, empieza a ser valorada como la alternativa para lograr una mejora importante en sus condiciones de vida. La continuación de estudios de primaria, la realización de cursos de capacitación en panadería, salón de belleza, manipulación de alimentos y las asesorías que han recibido para proyectos productivos son identificados como la mayor ganancia que han tenido con el desplazamiento. En cambio en los hombres, aunque con algunas excepciones, no se advierte el mismo interés en la educación.

Sin embargo, mujeres y hombres se identifican en la necesidad de que sus hijos se puedan educar para salir adelante, pero los subsidios que reciben no sirven de mucho pues no alcanzan para cubrir los gastos.

En la salud, aunque se opina que ha mejorado en la atención, el problema es que siempre hay que ir preparados con una do-

cumentación que certifique que son desplazados y con la carta de derechos de la población desplazada como medio de presión para que los atiendan, dada la negativa de entidades de salud para prestarles un servicio que no se limite a una atención de emergencia.

La necesidad más sentida es la vivienda. El pago de arriendo o el habitar en ranchos a los que sólo unos pocos les han podido hacer mejoras es considerado como el principal problema a resolver para vivir en unas condiciones dignas que les permita disponer de un espacio propio para la intimidad y la vida en familia.

La conclusión a la cual se llega por parte de los líderes desplazados con los cuales se lleva a cabo un conversatorio sobre resultados investigativos resume un sentir general sobre sus condiciones de vida al momento actual: “Las cosas han mejorado apenas una miguita”.

Las pérdidas

Los relatos sobre las pérdidas sufridas tienen un referente común: la buena vida de la cual disfrutaban antes del desplazamiento, en el campo o en la selva, con abundancia de agua, diversidad de vegetación, insectos, peces, animales domésticos, tierras en donde cultivar y una vivienda propia, el “no tener que depender de la ayuda de la nadie para poder subsistir”, “las buenas relaciones entre los integrantes de la comunidad” y siempre “apoyados en nuestros propios esfuerzos”.

Entre las personas desplazadas de Saiza la noción de pérdida también está puesta en relación con un importante retroceso en las mejoras que algunas personas habían hecho en sus propias parcelas con la construcción de peceras, la compra de animales o las cosechas que no pudieron sacar al mercado.

Este intento de reconstrucción de la comunidad perdida activa una memoria de larga duración sobre experiencias de desplazamiento forzado que vivieron cuando estaban pequeños y sus padres tuvieron que huir en

busca de refugio hacia otros lugares en Urabá o de éxodos de lugares donde se desarrollaban operaciones militares. En San José de Apartadó, por ejemplo, los años 1977-1979 fueron épocas muy duras porque “cuando el ejército entraba obligaban a salir de esas veredas hasta por uno o dos meses”. Pero al momento de retornar, ya las cosas no eran lo mismo, pues “cada éxodo daba lugar a que faltaran una o dos familias de cualesquiera de las veredas. Y ya en 1996 ya sí se dio totalmente el desplazamiento las veredas quedaron totalmente vacías, porque ahí sí ya se conformó el conflicto armado de verdad”.

Otro componente central en la memoria de las pérdidas son las múltiples muertes de familiares, compadres, líderes, vecinos asesinados en condiciones de total indefensión o desaparecidos “siendo que no le debían nada a nadie” y de los que no se ha sabido nada hasta hoy. Como no es posible volverlos a la vida, se concluye, de forma unánime, que son pérdidas irreparables, pues no hay nada que pueda llenar el vacío que deja su ausencia.

Al lado de esta visión está la mirada hacia delante, un “no dejarse aplastar por el pasado” y “poner los pies sobre la tierra”. Una mujer desplazada de Mutatá, después de haber expresado el dolor que lleva consigo “por no saber si su marido está vivo o muerto” y haberse quedado sola con un poco de hijos y con una “mochita de casa”, afirma que cada día que pasa no cesa de darle las gracias a Dios por estar viva y ver cómo puede arreglar su vivienda y obtener algún empleo. Esta mirada esperanzadora frente al futuro es más afirmativa en las mujeres. En los hombres siguen teniendo un mayor peso los sentimientos de derrota y humillación ante la pérdida de sus tierras y lo que habían construido como comunidad y que de pronto vieron derrumbarse ante sus propios ojos sin poder hacer nada para evitarlo.

Percepciones y autopercepciones

El período posterior al desplazamiento ha sido un tiempo de autorreflexión sobre su nueva condición de desplazado y de reconocimiento de los otros con los cuales se establece relación.

Lo característico es una resistencia a la utilización de un término que consideran no da cuenta de la realidad que vivieron: “No es que seamos, sino que nos desplazan contra nuestra voluntad”, “Yo pienso que nunca quise ser desplazado”, “Nunca pensé yo que iba a ser desplazado porque el verdadero desplazamiento es un horror, es algo que no es para nadie ni para ningún ser humano”. Pero, al mismo tiempo la necesidad de hacer visible su situación hace que se utilice esta noción “todas las veces que sea necesario”. Se trataría de un “uso pragmático de la identidad” como lo analiza Makki entre grupos de refugiados Tutsi sobrevivientes del genocidio ruandés

En el malestar que les produce la denominación de “desplazados” incide el rechazo de que son objeto al expresar que son desplazados, porque la gente piensa: “Si se vino de por allá es porque es guerrillero”. A esta imagen negativa del desplazado consideran que ha contribuido la fuerza pública y las autoridades locales que “utilizan a la población desplazada como un chivo expiatorio a quien atribuirle los problemas de delincuencia que se presentan en el lugar”. Es la experiencia de las gentes que habitan el barrio El Progreso en Mutatá, donde se ha vuelto costumbre decir que la población desplazada “es la que hace todo lo malo, los que roban, las prostitutas, los que fuman marihuana, los que violan”.

El ser vistos como *limosneros* suscita un sentimiento de rechazo por la ofensa que ello representa a su dignidad y la injusticia que se comete con ellos al desconocer cómo se han visto obligados a pedir no por “pereza de trabajar” o por “esperar a que todo se los den”,

sino porque no les ha quedado otro camino y ante la ausencia de una ayuda por parte del estado con algún empleo o el otorgamiento de préstamos para iniciar algún negocio.

En otros casos, la buena presentación personal, la facilidad de expresión y el nivel educativo de algunas personas se han vuelto en su contra por no acomodarse al estereotipo de desplazado que comportan personas y funcionarios públicos. Es lo que ha vivido una líder indígena de Mutatá, quien ha sido descalificada por los empleados de la administración porque les pareció que ella ya no necesitaba: “¿Y para qué se pone a recibir subsidios del Gobierno sabiendo que usted tiene?, ¿por qué no le da ese espacio a otra que sí en verdad lo necesita?”.

Pese a todo, la urgencia de lograr la inclusión en el SUR (Sistema Único de Registro de población desplazada) y exigir sus derechos los impulsa a hacer visible su existencia como “población desplazada por la violencia” y hasta tanto no ver realizados sus anhelos de contar con una vivienda propia, empleo estable y educación para sus hijos.

La experiencia organizativa

En Urabá la población desplazada logra avanzar en sus formas de relación con instituciones de diverso tipo y frente a las cuales se profesa sentimiento de gratitud por las ayudas, la información, la asesoría y la capacitación y formación en la defensa de sus derechos. Se menciona a Opción Legal, Acción Social, las Hermanas Lauras, Mejoramiento Alimentario Nutricional de Antioquia – Maná–, el Sena, Acción contra el Hambre, Oxfam, Chips, Icbf, Dapar, Sedavida, Médicos sin Fronteras, la iglesia católica (Pastoral Social), la iglesia adventista, la Gobernación de Antioquia, Personería, Defensoría, Unicef, las alcaldías de Chigorodó, Mutatá, Apartadó.

En cuanto a sus formas de organización, se encuentra alrededor de organizaciones de

carácter local y regional⁶. En el primero están las asociaciones de cada uno de los municipios: Asociación Comunitaria de Desplazados de Mutatá – Asocodemut–, Mesa de Trabajo de Turbo, Asociación Comunitaria de Desplazados de Apartadó – Asocodea–, Fundación Tierra Prometida (Chigorodó), Corpocodesa (Chigorodó, Carepa), y en el segundo nivel se encuentra Cordeu como instancia subregional. Los municipios de Vigía del Fuerte y Murindó no se han logrado articular por ser zonas de difícil acceso.

En Mutatá, Asocodemut aglutina a familias provenientes de Pavarandó Grande, Pavarandocito, Caucheras, Bejuquillo, Chontadural, Leoncito la Selva, Fortuna, Belén de Bajirá. Estos lugares, antiguas zonas de influencia de las Farc, fueron golpeados por el desplazamiento.

En Carepa, Corpocodesa se inicia con familias procedentes de Quebrada de los Indios vía Turbo, Chigorodó, Loma Verde, y 200 familias en Piedras Blancas, todas estas provenientes de Saiza y veredas aledañas.

En Apartadó, Asocodea se inicia desde el 2001 con unas 110 familias fundadoras; en el 2003 surge una nueva organización, Asodesco, que posteriormente se fusiona con Asocodea.

En Turbo, la Mesa de Trabajo está conformada por doce organizaciones, agrupa a población en su mayoría afrodescendientes, originarios de las regiones del bajo y medio Atrato, y mestizos campesinos del Urabá antioqueño y de las estribaciones de la Cordillera Occidental, y de la Serranía de Abibe en el departamento de Córdoba.

En Chigorodó se constituye Tierra Prometida con familias provenientes de las comunidades del río Atrato Caño Manso, Bodeguitas. El factor religioso ha jugado un papel importante, dado que la mayoría de sus asociados son evangélicos, lo que se identifica como una fortaleza que les ha permitido estar unidos y solidarios.

La estructura organizativa de Cordeu, el Comité Regional de Organizaciones de Población Desplazada, cuenta con representantes de cada una de las organizaciones a las cuales se hizo referencia en cada municipio. Cordeu se conformó con el propósito de trabajar a favor del restablecimiento de los derechos fundamentales de la población desplazada.

Es pertinente hacer notar que estos logros organizativos no son ajenos a una tradición de movilización social y conformación de organizaciones de carácter gremial, de cooperativas, organizaciones de madres comunitarias, de defensa de los derechos humanos, juntas de acción comunal y pequeñas empresas de economía solidaria.

Un logro del cual se muestran orgullosos los líderes de Cordeu es su reconocimiento como interlocutores por parte de Acción Social, Defensoría y Personería, la representatividad que han logrado a nivel regional, departamental y en lo nacional con su participación en la Mesa Nacional de población desplazada, un escenario de confluencia de diversas organizaciones con visiones e intereses difíciles de conciliar, lo que ha incidido en una crisis de esta instancia ante la dificultad para acercar posturas distantes frente a temas como la política pública para la atención de la población desplazada y los resultados de la estrategia de seguridad democrática del gobierno Uribe.

En relación con su participación en esta Mesa Nacional, los líderes de Cordeu plantean que se han desempeñado con autonomía de las asociaciones ya existentes “por no sentirnos representados por ninguna de ellas y tener un proceso organizativo propio como región” y haber contribuido al fortalecimiento del espacio de “los independientes” del cual participan otras organizaciones de despla-

6. Para abordar este punto se toma como referencia la sistematización de la experiencia organizativa de grupos de población desplazada en Urabá que han contado con el acompañamiento de Opción Legal.

dos en otras regiones del país. Esta participación les ha permitido intercambiar experiencias con otros líderes y organizaciones.

En un balance de las actividades desarrolladas, Cordeu admite que su labor aún no ha alcanzado tener mayor impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población desplazada, aunque se ha logrado elevar el nivel de instrucción de los afiliados, capacitación en el conocimiento de sus derechos, de la política pública y también de la inclusión de personas en el SUR, la formulación y la gestión de recursos para proyectos productivos y el acompañamiento a la experiencia de retorno a Saiza.

A raíz del deterioro que se ha presentado en la situación de seguridad en Urabá se manifiesta preocupación, al igual que por las presiones ejercidas por las AUC desmovilizadas sobre las organizaciones, el desafío que ahora deben encarar frente a la aparición de otras organizaciones de desplazados alegando una ineficacia de Cordeu y ante la presencia de nuevas ONG que son miradas con desconfianza por sus posibles nexos con grupos paramilitares.

Hacia el futuro, los protagonistas de esta importante experiencia organizativa tienen planteados diversos retos: consolidación de lo que han ganado en organización, en la defensa de sus derechos y una mayor fundamentación de su lugar como “independientes”, sin plegarse a las posturas e intereses del gobierno, garantizar su autonomía.

El miedo al retorno

Frente a la posibilidad de retorno es posible advertir, con la salvedad de las personas procedentes de Saiza, una postura escéptica ante la presencia de los actores armados y por consiguiente el riesgo de verse nuevamente desplazados. Aunque se reconoce que la fuerza pública ha hecho presencia, ello no es considerado como una garantía, pues ella es

transitoria y debido a las presiones que ejercen sobre la población.

Pero también hay quienes manifiestan que el hambre y el desespero los han llevado a tomar la decisión de volver, aún con el riesgo de morir asesinados. Es la situación que afrontan personas que han retornado a la vereda Mulatos y que han hecho pública su decisión de darle continuidad a este proceso, con la condición de ser respetados por los soldados “porque siempre llegan allá es a atropellar porque nos siguen considerando a nosotros como los guerrilleros”.

En lo que respecta a Saiza, aunque se trata del proceso más avanzado, emergen varios asuntos que son motivo de preocupación: el accionar de grupos armados ilegales que siguen haciendo presencia en la región, la expansión de cultivos de uso ilícito en Saiza y en toda la región de Tierralta, y las presiones del ejército para convertirlos en colaboradores.

Esto ha significado la definición y validación de criterios de comportamiento a observar por parte de la comunidad en la relación con los actores armados: “Tratar con ellos cuando sea necesario pero sin compromiso. Si se encontró con el ejército, hablar con el ejército; se encontró con la guerrilla, hablar con la guerrilla, esto es lo que se necesita ahora para poder continuar con el retorno”. Frente a personas que siembran coca, se ha optado por advertirlos de los riesgos que corren y los perjuicios que le causan a la comunidad y a Saiza.

La experiencia de la población desplazada de Urabá en Medellín

Medellín, la capital del departamento de Antioquia, es el principal lugar de recepción de población desplazada proveniente de Urabá. Ello ocurre desde 1992 y se agudiza entre 1996 y 1998. Aunque desde el año 2000 se presenta una disminución, el 11% de las personas que continúan llegando a Medellín pro-

ceden de Urabá, principalmente de Apartadó (Personería, 2006).

Los lugares de destino son las zonas de riesgo localizadas en la periferia de las zonas nororiental, noroccidental y centro-occidental de la ciudad, siendo la primera de ellas el principal polo de atracción, dando continuidad a la tradición de lugar de refugio de migrantes y perseguidos por la violencia política y de pobladores urbanos destechados. La presencia de los desplazados de Urabá se ha hecho visible en algunos asentamientos donde se han llevado a cabo operativos militares en busca de auxiliadores de la guerrilla y en los cuales se han activado grupos de autodefensas.

La población con la cual establecemos relación llegó a Medellín entre los años 1996 y 2003, y proviene de veredas y cabeceras pertenecientes al eje bananero. En la elección de esta ciudad fue decisiva la presencia de familiares y de paisanos que llevaban algún tiempo viviendo en la ciudad y que se vinieron de Urabá en circunstancias similares a las que ellos vivieron. Además, algunos de ellos tenían por costumbre escuchar las noticias y les llamaba la atención lo que se decía sobre la violencia en Urabá y “cómo se mentaban barrios donde había gente pobre, gente destechada como llaman, desplazado, aunque yo no entendía qué era esto”. Para algunos, Medellín surge como la última opción después de haber fracasado en su intento de establecerse en lugares aledaños a Urabá.

El tránsito hacia Medellín se hace por vía terrestre, lo cual implica un riesgo para quienes han tenido que salir debido a amenazas de la guerrilla, a causa del control ejercido por las Farc sobre algunos tramos de la carretera al mar, especialmente en el cañón de La Llorona. Al llegar a la terminal de transportes en Medellín lo primero que hacen es llamar a los familiares o conocidos que residen en los asentamientos de población desplazada o en casas ubicadas en barrios pobres de la ciudad.

Los primeros días las cosas marchan bien, pero más rápidamente que en Urabá el ambiente de convivencia se deteriora y obliga a pensar en un nuevo desplazamiento hacia otro lugar de la ciudad. Gracias a la información que circula de manera eficaz se decide el traslado hacia otra parte, que por lo general es un asentamiento, aunque con el problema de que se tienen que entender con “el duro” (el jefe de las autodefensas con influencia en el sector) para negociar la compra de un lote o de un rancho. Una pareja procedente de Chigorodó residente en el asentamiento El Pinal recuerda cómo *les tocó* comprar un lote por valor de \$25.000 pagaderos en cuotas semanales de \$5.000, aparentemente muy barato, pero muy caro para ellos, “pero de todas maneras había que pagarlos, quisiera o no quisiera”.

La superación de la humillante condición de arrimados se valora como un logro, pero al mismo tiempo se extraña a Urabá, por el cambio de clima y la sensación de encierro de la que se quejan las mujeres acostumbradas “a estar al aire, con las puertas abiertas y ahora tener que estar así como un pájaro encerrado”.

Lo más difícil de soportar es el encontrarse con que la violencia que se creyó haber dejado atrás también está en la ciudad, justo en los asentamientos donde se han instalado. Así describe María la situación que vivió entre 1997 y el 2003 en el asentamiento El Pinal:

La gente extraña tampoco podía ingresar al barrio, los esposos de uno salían y uno no sabía si regresarían. Entonces era una zozobra muy impresionante, los cogían a ellos borrachitos ahí y les daban. Entonces la gente comentaba: “Se va a meter la guerrilla o se van a meter los paracos y van a barrer, ahí no tienen que ver si son inocentes o no, ahí le van a dar es por parejo”. Y una era esperando que llegara la noche y sin saber en qué momento le iban a llegar a tocar la puerta. Entraban vestidos de

soldados y uno no sabía si era el ejército o era quién, entonces era una zozobra muy impresionante. Yo digo: la peor historia que he vivido fue en El Pinal; la gente se encastraba a las seis de la tarde (Entrevista con mujer desplazada de Urabá en Medellín, mayo del 2006).

El Pinal es uno de los asentamientos que se han visibilizado en la ciudad por su estigmatización como una base de apoyo de la guerrilla por la procedencia de buena parte de sus habitantes de Urabá y por la participación de líderes en acciones colectivas, como la toma de la iglesia de la Veracruz el 6 de noviembre de 2002.

Del ambiente de zozobra vivido con las incursiones del ejército en busca de supuestos colaboradores de la guerrilla y el acoso de los grupos de autodefensa se transita hacia una relativa calma, una vez que se afianza el control de territorio por parte de la fuerza pública y de algunos grupos de autodefensa. Para María, desplazada de Chigorodó, sin embargo, este nuevo panorama ha tenido sus desventajas en el asentamiento, dado el recrudecimiento de los problemas de consumo de droga y de delincuencia que eran combatidos por la guerrilla.

Con la desmovilización de los paramilitares, también María identifica un cambio que considera positivo “porque ahora *el duro* que manda en la zona le ha dicho a la gente que no hay que temer, y que si tenemos algún problema con un vecino o quien sea, *“ya tenemos derecho a hablar es con la ley, que no tenemos por qué dirigirnos a ninguno de esa gente”*”.

De igual modo, los testimonios de otras personas desplazadas de Urabá que residen en otros asentamientos coinciden en estos nuevos miedos experimentados debido a la presencia de los actores armados y las amenazas de que han sido objeto por parte de los mismos grupos que fueron responsables de

su desplazamiento en Urabá. Es interesante observar, en algunas personas, un desacuerdo con habitantes de los asentamientos que colaboran con ellos:

Ya sea por el miedo, por la costumbre de llamarlos para que intervengan en los problemas familiares o, lo más grave, porque se *amangualan* con ellos para sacar ventajas en el manejo de ciertos negocios o porque les gusta manejar armas o para imponer su propia voluntad.

Ante los problemas de seguridad que tienen que afrontar en la ciudad, algunas personas acuden a la Personería, a la Defensoría y a la Secretaría de Gobierno. La experiencia de relación con estas instituciones les ha causado un gran impacto por ser la primera vez en toda su vida, que sienten que han tenido “alguna protección del Estado”.

Gracias a la información de familiares o conocidos se enteran de que pueden obtener alguna ayuda en alimentos y para el pago de alquiler. No obstante, el miedo vuelve un tener un peso importante en una actitud renuente a dar declaración como desplazados que puede poner en riesgo sus vidas. Sin embargo, la necesidad de sobrevivencia hace que acudan ante la Personería o Defensoría para ser incluidos en el Sistema Único de Registro. Para su sorpresa hay quienes son rechazados porque se pasó el tiempo o porque se considera que no dicen la verdad. En medio de la confusión y el rechazo a esta decisión, se concluye que lo mejor es no seguir insistiendo y “valerse por sus propios medios”.

Estrategias de supervivencia

La aceptación o el rechazo de personas como desplazados por parte de Acción Social ha generado malestar entre la misma gente, como señala una mujer desplazada residente en el asentamiento El Pinal, por la forma como han beneficiado a personas que han mentido

mientras que otras que sí lo son se han quedado por fuera: “Ahí mismo les dan un poco de mercado, siendo que no son desplazados, mientras que uno que lleva tiempos ahí, y uno que sí lo es, pues nada”.

Por parte de aquellos que han logrado su inscripción en el SUR, y aunque reconocen lo mucho que les han servido las ayudas que les dieron en un comienzo, no ocultan su malestar con Acción Social por la mala atención, el tiempo y los pasajes que han perdido haciendo fila o llamando a un teléfono en el que nunca contestan. “Qué cansancio con la Red—expresa una mujer desplazada de Chigorodó—. Yo ya estoy acostumbrada a la situación y ya no se me da como mucho si nos ayudan o no, aunque la necesitamos mucho, pero si no, ya nosotros ya estamos como acostumbrados y como tratar de sobrevivir una por sus propios medios”.

Pero ¿dónde encontrar un empleo si no se tienen referencias? y “¿si no hay nadie que lo conozca a uno en esta ciudad? La colaboración de familiares que llevan un tiempo viviendo en la ciudad y los recomiendan ante personas conocidas es lo que a algunos les permite obtener un empleo, sólo por algunos meses. Además, en su desempeño se encuentran con dificultades que les plantea un medio urbano con el que no están familiarizados:

Porque yo sé muchas artes: sé manejar retroexcavadora, carro, moto, motosierra para cortar madera, yo sé muchas artes. Pero usted me dirá: “Y el trabajo suyo es tal cosa, ¿pero usted no dizque sabe manejar carro, pues?”. Sí, pero es que es muy distinto uno manejar en una trocha o en un pueblo, a uno meterse aquí bien novato a un rompoi de estos. Uno llega y se monta en un carro de esos y cuando menos pensó ahí mismo lo dañó, y es peor ¿o no es así? (Entrevista con hombre desplazado de Urabá en Medellín, mayo del 2006).

Es por esto que Uriel quisiera retornar a Urabá, pero las advertencias de familiares sobre el peligro que corre si retorna lo llevan a desistir y a probar a suerte en la calle con las ventas ambulantes para tener algo que llevar a la casa, unos \$5.000 que le quedan de ganancia con la venta de “Tablas eléctricos” de la Virgen del Carmen, el Corazón de Jesús y el papa Juan Pablo II.

Ciertamente, las ventas ambulantes se han convertido en la alternativa más socorrida para sobrevivir en la ciudad, aunque les han causado nuevos problemas debido a la desventaja en la que se encuentran frente a otros vendedores que han llegado primero y cuentan con la protección de los *duros* que ejercen un control sobre los espacios públicos, la persecución de los guardas de espacio público y los requisitos que hay cumplir para estar debidamente acreditados. Cuando les decomisan la mercancía “es poco lo que queda por hacer porque no hay cómo reponer lo perdido”.

Entonces, las opciones que quedan son el reciclaje, con el problema de que en esto hay mucha competencia, y pedir limosna, algo que sólo uno de los hombres reconoce haber hecho en algún momento, pero camuflándose con un sombrero, un pantalón y una camisa rota para no ser reconocido por sus paisanos.

Algunos datos de la Encuesta Nacional 2003 sobre la población desplazada muestran que el vínculo laboral de las personas encuestadas en Medellín era con la economía informal. También para el mismo año, un estudio de la Organización Panamericana de la Salud y la Universidad de Antioquia indica que antes del desplazamiento, 86 de cada 100 jefes de hogar tenían algún oficio remunerado. De ellos, la mitad tenía oficios en agricultura, pesca o minería, 22% desempeñaban oficios varios, 4% eran venteros ambulantes y en menor proporción eran trabajadores de la construcción o de empleo doméstico.

Por su parte, las mujeres despliegan una iniciativa para conseguir recursos sumándose a los recorridos, consistentes en la recolección de alimentos que les regalan en diferentes lugares, plazas de mercado, carnicerías, tiendas. Las largas caminatas que es necesario hacer todos los días desde muy temprano, al sol y al agua, demandan una capacidad física y mucha entereza para sobreponerse a la humillación que les produce pedir limosna y soportar los insultos de personas: “Tan joven y pidiendo”. A veces se consigue muy poco, pero en todo caso “siempre hay algo pa’ echarle a la olla” y ayudar a aquellas personas que por las condiciones de salud no pueden participar en estas extenuantes jornadas.

Al igual que en Urabá, las mujeres hacen averiguaciones sobre alguna posibilidad de empleo, sin embargo lo único que ha resultado es el desempeño como empleadas domésticas. Otras se inventan la manera de elaborar y vender arepas y tamales, pero en esto hay mucha competencia. La realización de estas labores contribuye a un deterioro de las condiciones de salud por el tiempo y el esfuerzo que ello requiere.

Según la encuesta de hogares realizada por la red de solidaridad, el ingreso promedio mensual de un hogar de población desplazada en Medellín es de \$140.000, el 22,8% de los hogares tienen niños menores de 5 años, el 5% de los hogares tienen mujeres embarazadas y el 7,4% tienen hijos lactando (Acción Social. Citado en: Personería, 2006).

La precariedad en las condiciones de vida, se manifiesta en las enfermedades que padecen adultos y niños generadas por los problemas con el suministro de agua potable, las plagas de pulgas y de roedores, las calles sin pavimentar, las aguas negras. Aunque se valora el acceso a servicios de salud, tampoco hay dinero para pagar las fórmulas médicas ni para los tratamientos recomendados. Las mu-

jes prefieren atender a sus hijos que cuidar su propia salud.

Con la educación la situación es crítica porque aunque se consiga un cupo no hay cómo financiar uniformes, útiles ni responder a las exigencias de las instituciones que no entienden como su situación de pobreza no les permite cumplir con ellas y no por descuido como creen algunos maestros.

El no poder disponer de un espacio propio también es señalado como el problema más importante a resolver para vivir en la ciudad, pero los subsidios que algunos de ellos han obtenido no les alcanza para financiar una vivienda, además el pago de los servicios públicos hace que se prefiera permanecer en un rancho en el asentamiento, aunque con la preocupación de algún desastre natural por vivir en zona de alto riesgo o las presiones ejercidas por los grupos armados.

Al hacer un balance sobre su estancia en la ciudad, se toma como referente sus condiciones de vida antes del desplazamiento. La apreciación unánime es una notable mejora, con el agravante de que en la ciudad se generan nuevas necesidades que no tiene cómo cubrir, se sufre mucho. Aún en medio de la violencia que había en Urabá, se aprecia que se tenían más facilidades para poder vivir dignamente en sus propias comunidades.

Con todo y las penurias que han tenido que afrontar, el retorno a Urabá no es considerado como opción viable por los problemas de inseguridad y porque ya se ha recorrido un camino en la ciudad que sería muy difícil volver a recorrer, “pues es que en realidad ya uno viviendo aquí *está estable*, pobremente pero tiene su ranchito en donde meterse”.

Percepciones y autopercepciones

La invisibilización es asumida como un mecanismo de defensa para evitar ser señalados como colaboradores de la guerrilla, por el mero hecho de ser desplazados de Urabá. La

experiencia que algunos dicen haber tenido es de un rechazo inmediato cuando han tenido que decir que vienen de esta región y residen en un asentamiento. Además, “en algunas instituciones que ayudan a los desplazados nos han recomendado que no digamos que somos desplazados y menos de Urabá”.

Para personas de procedencia afrocolombiana la discriminación racial se ha convertido en un factor que ha hecho más difícil su estancia en la ciudad, en especial para los menores de edad que asisten a la escuela. Las dificultades que un hombre desplazado de Chigorodó ha debido afrontar con sus hijas es una muestra de ello:

Usted sabe que en la región de Urabá esos colegios son combinados, allá se tiene como muy normal todo, pero entre los niños existe ese problema racial, acá ven curioso que haya un niño de piel morena, y ellos todos de otro color, pero bueno. Ya eso ahí es más fácil porque como ellos son niños se van adaptando ya, y el niño ya está sometido a lo que viven todos. Con la niña también hubo el mismo problema: se mantenía peleando porque era la morena del salón, entonces le tocó afrontar ese problema. Ella para adaptarse y los niños para acogerla a ella, la forma de hablar diferente, la forma de vestir diferente, el estudio es diferente, todo es diferente, la forma de vivir es diferente, la comida es diferente, todo es muy diferente. Entonces acaba como con la forma de vida de uno. A la niña en este momento la está tratando una sicóloga porque inclusive lleva tres primeros y no se ha podido adaptar con esta situación que hemos vivido (Entrevista con hombre desplazado de Urabá en Medellín, mayor del 2006).

Pero también hay manifestaciones de gratitud hacia personas que los han ayudado y

no han tenido temor para establecer relación con las personas desplazadas de Urabá, como lo han hecho algunos sacerdotes y políticos, aunque con estos últimos se mantiene una desconfianza porque lo hacen con el interés de que voten por ellos.

Al comparar la situación en la que se encuentran con respecto a otros pobres en la ciudad se considera que “hay gente más necesitada que uno” porque al menos ellos tienen un rancho donde meterse, pero “hay mucha gente que no tiene a donde llegar, ni que comer nada, entonces uno, pobremente, pero tiene el bocadito todos los días, tiene un ranchito donde meterse, tiene sus hijitos, pues, bien se puede decir, a comparación de otras personas”.

La experiencia organizativa

Un hecho que sentó un precedente en protagonismo de líderes desplazados procedentes de Urabá en Medellín fue el impulso a la acción colectiva de protesta, la toma de la iglesia La Veracruz el 6 de noviembre del 2002, con el propósito de hacer visible la problemática de la población desplazada en la ciudad y el restablecimiento de sus derechos, y para denunciar los atropellos por parte de los grupos armados. Aunque se logra un arreglo con la alcaldía, los líderes de mayor figuración fueron objeto de amenazas. En el 2003, la IV Brigada lleva a cabo la operación Estrella VI en el sector de La Honda que deja como resultado un saldo de unos 78 capturados y un nuevo desplazamiento masivo de población, lo cual sienta un precedente en el fenómeno del desplazamiento intraurbano (Atehortúa, 2007).

El liderazgo de hombres desplazados de Urabá que residen en otros asentamientos y con una trayectoria en su desempeño en organizaciones sindicales, cívicas y en los concejos municipales ha sido fundamental en las juntas de vivienda que han tenido un papel clave en la construcción de una red de relaciones con funcionarios e instancias de la administración

municipal y con políticos para el adelanto de obras básicas de infraestructura, principalmente acueductos, casetas comunales y escuelas. Esto se corresponde con la tendencia predominante observada en la ciudad de Medellín en cuanto a la organización de la población desplazada, con 10 organizaciones que equivalen al 27,8% del total, lo cual refleja la vivienda como una preocupación fundamental para las organizaciones de personas en condición de desplazamiento (Encuesta realizada por la Alianza UT-PIU citada en Cmaipdv, 2006).

En general, las personas desplazadas de Urabá reconocen que en su estancia en la ciudad han establecido contacto con entidades tales como Acción Social, Defensoría, Personería, Pastoral Social, organizaciones no gubernamentales, Cámara de Comercio, Comfama, Cruz Roja, Sena, con funcionarios de la alcaldía, párrocos, religiosas y políticos. Pero no todos han tenido las posibilidades de acceder a los servicios que ofrecen estas entidades. Al respecto, una mujer desplazada que reside en el asentamiento El Pinal sostiene que “hay información que sólo manejan los líderes y personas cercanas a ellos”.

¿Reparación?

Tanto entre las personas desplazadas de Urabá que han permanecido en la región como entre las que viven en Medellín es común un entendimiento de la reparación como la garantía de algunos derechos fundamentales:

Mientras que el Estado no me dé un techo donde yo pueda vivir relajado con mi familia, no me dé los mecanismos para protegerla de la desnudez, del hambre, de la falta de estudio, de la falta de salud, creo que sigo siendo desplazado y yo se lo digo a todos los colombianos.

Con respecto a las pérdidas sufridas con la muerte violenta de sus seres queridos, no es posible reparar nada, nada ni nadie podrá volverlos a la vida.

Al indagar por las expectativas frente a la acción de la justicia para la reparación de las atrocidades de las que fueron víctimas, se expresan diversas opiniones. Mientras algunos piensan que los victimarios no pueden ser perdonados y se les debe infligir un castigo de por vida con su reclusión “en una cárcel por el estilo de lo que fue la Gorgona” (donde fueron llevados asesinos de la época de La Violencia), otros, por el contrario, creen que el perdón se justificaría en aras de vivir en paz y ante el temor que se alberga frente a una repetición de una historia ya vivida de venganzas contra personas de las mismas comunidades.

En esta postura con respecto a la reparación se oscila entre la idea de justicia restaurativa y de reparación con énfasis en un mejoramiento de las condiciones de vida de las víctimas.

Yo me quedaría muy contento con que se recupere todo lo que ocurrió, por ejemplo, digamos las obras, lo social, que es lo que más me interesaría a mí, el bienestar de la comunidad. Quedaría más contento con eso que no con que encanen al victimario y le paguen 20 millones al fallecido. ¿Cierto?, porque ahí está encanado, ahí le sacaron eso, ¿pero él? y quien sabe qué podrá pasar de aquí en adelante (Entrevista con hombre desplazado Urabá, 2006).

En este miedo a la venganza se puede leer lo que Sánchez (2003) analiza con respecto al problema de la memoria: un miedo colectivo al pasado ante el temor de la repetición de un ciclo de venganzas. Sin embargo, es necesario advertir que al momento de la realización del trabajo de campo se iniciaba la discusión sobre los términos de una ley de justicia y paz, y no se habían hecho públicas revelaciones sobre vínculos entre los paramilitares y políticos.

Conclusiones

La confrontación entre guerrillas y Estado, las disputas entre paramilitares y guerrillas y

de estas entre sí por el dominio estratégico del Urabá han sido un factor determinante en el drama vivido por la población convertida en el blanco de las acciones. En la medida que la confrontación se intensifica y se expande, involucra a grupos de población cada vez más diversos: campesinos, comunidades indígenas, afrocolombianos, forzados todos a abandonar sus territorios, con lo cual se han visto enfrentados a las que en otras épocas vivieron padres y paisanos, y que los condujeron a buscar refugio en otros lugares de la región o en el departamento de Antioquia.

La experiencia vivida por estos grupos de población está mediada por la historia de una región en donde se tejen elementos de continuidad entre las violencias de ayer y de hoy, aunque se reconocen elementos distintivos en cuanto a la existencia de un “conflicto armado de verdad” asociado con las disputas entre varios grupos armados por los territorios, por las tierras o por los recursos naturales que se encuentran en aquellos lugares de donde fueron expulsados.

En los miedos y las situaciones de terror experimentadas por esta población se han hecho palpables los niveles de barbarie a los cuales se ha llegado por parte de los grupos armados, puestos de manifiesto en la aplicación de los más diversos métodos de crueldad en contra de la población que, al igual que en otras regiones, se ha visto forzada a desplazarse de manera individual o en éxodos como alternativa para salvar sus vidas.

Si bien los grupos armados, especialmente en las áreas rurales, cumplen con su propósito de “barrer” con los grupos de población catalogados como auxiliadores del enemigo, es importante tener en cuenta la capacidad de resistencia de estos grupos de población desplazada, en los lugares de recepción, en la misma región. Aunque el miedo continúa siendo una constante, ello no se convierte en un impedimento para el luchar obstáculo

se hace desarrollan una capacidad ello no se convierte en un impedimento para idear y poner en práctica de iniciativas de organización y acción colectiva.

En relación con la experiencia vivida después del desplazamiento, es clara la relación de continuidad con los miedos experimentados en los lugares de expulsión, aunque se advierten diferencias de acuerdo con su localización. No es lo mismo estar en Apartadó que en Mutatá o en un asentamiento en la ciudad marcado como base de apoyo de la guerrilla y en donde la población ha tenido que enfrentar señalamientos y amenazas por parte de los actores armados que continúan catalogándolos como colaboradores de las guerrillas.

Con respecto a sus condiciones de vida, son más las similitudes que las diferencias entre los lugares de recepción en Urabá y en Medellín, aunque en la ciudad se experimentan mayores dificultades con la adaptación al ambiente urbano, desempeño en actividades laborales, la consecución de los alimentos y el tener que destinar escasos recursos al pago de servicios y de transporte y a los problemas de inseguridad no sólo relacionados con el acoso de los actores armados, sino de bandas delincuenciales. Urabá, pese a las violencias, es considerada como el lugar donde pudieron vivir con dignidad y posibilidades de sobrevivencia.

También es significativo que tanto para quienes permanecen en la región como para quienes se encuentran en la ciudad, el retorno es visto con un marcado escepticismo, ante la incredulidad en un mejoramiento de las condiciones de seguridad y de la desconfianza frente a las promesas del Estado, el riesgo de volver a empezar, cuando se ha recorrido un camino, que en especial para quienes residen en la ciudad se torna más difícil de reiniciar.

En el plano organizativo, es claro el avance logrado por la población desplazada residente

en Urabá en la constitución de organizaciones y en su capacidad de movilización y exigencia de sus derechos. En Medellín este tipo de experiencias es aún incipiente. A pesar de ello, hay un elemento en común que no es ajeno a una tradición de movilización y organización social en Urabá: el papel de líderes provenientes de Urabá en la conformación de organizaciones en los asentamientos y en acciones colectivas.

En los dilemas que afrontan entre hacer visible o no su condición como desplazados se revela, por un parte, la resistencia a asumir una situación que no fue el resultado de una decisión voluntaria, el temor a la discriminación que de manera más acentuada han experimentado en la misma ciudad; y de otro lado, el imperativo de hacerse visibles para la reclamación de sus derechos.

Ciertamente, en las narrativas sobre la experiencia del desplazamiento hay similitudes que tienen que ver con las características de la población con la cual nos relacionamos, con las pérdidas que se han sufrido, con las dificultades que han tenido que enfrentar en los lugares de recepción, al mismo tiempo se revelan unas diferencias que tienen que ver con las decisiones que de manera individual se asumen y se ponen en práctica. No se trata, pues, ni de comunidades ni de sujetos homogéneos.

Es del caso llamar la atención sobre diferencias entre hombres y mujeres. En estas, la vivencia de miedo y terror está relacionada con lo que ocurre en el entorno doméstico y vecinal, con lo que ocurre con los hombres, sacados de las casas, bajados de los buses o masacrados, mientras que en los hombres es más explícita su referencia a las causas del desplazamiento, a las dinámicas del conflicto armado y el haber sido blanco directo de los métodos de terror puestos en práctica por los actores armados. Sin embargo, en unos como en otros es pronunciado el temor a ser confundidos con colaboradores de la guerrilla.

Así mismo, los hallazgos resultados del trabajo de campo realizado coinciden con lo que otras investigadoras han pedido establecer (Meertens, 1997) con respecto a los cambios que se han producido en las mujeres al tener que verse enfrentadas a cumplir funciones propias del jefe de familia y lanzarse a la búsqueda de nuevas oportunidades para mejorar su situación, aunque no hay que perder de vista que en cuanto a las posibilidades de educación y capacitación abarcan a una parte de población, quedando sometidas a una situación de mayor vulnerabilidad mujeres analfabetas, mayores de edad, con problemas de de salud.

Pero también para los hombres el desplazamiento ha implicado cambios en sus vidas, lo cual los ha colocado en una situación de vulnerabilidad que no únicamente está puesta en relación con la dificultad para cumplir con los roles a los cuales estaban acostumbrados, sino en su propia identidad al verse sometidos a una condición de “menores de edad” humillados y agobiados por una sensación de inutilidad más acentuada en hombres con escaso nivel de instrucción y dedicados a las labores del campo.

De otra parte, es significativa la lucha de padres y madres por preservar la familia, aun en los momentos más críticos, y la importancia de los hijos como un sostén afectivo y material. Ellos se han convertido en buena medida en su razón de vivir.

Referencias

- Alianza Pilas-Atención a Desplazados y Grupos Vulnerables (2006). Diagnóstico de las poblaciones desplazadas y vulnerables y estrategias de respuesta. En: Organización Internacional para las migraciones. Misión Colombia. Consulta en: <http://www.oim.org.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=216>.
- Atehortúa, C. (2007). Caracterización del desplazamiento forzado intraurbano. Medellín 2000-2004. Medellín, Tesis de Maestría, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia.

- Comité Municipal de Atención Integral a Población Desplazada por la Violencia-Cmaipdv- (2006). Plan Integral Único (PIU). Apartadó (en medio magnético).
- Gobernación de Antioquia-Dapard-Comité Departamental de atención a la población desplazada (2006). Plan integral único de atención a la población afectada por el desplazamiento forzado por la violencia en Antioquia -PIU- Medellín (en medio magnético).
- Conferencia Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sección de Movilidad Humana. (2001). Desplazamiento forzado en Antioquia, 1985-1998, Vol. 8. Bogotá.
- Contraloría Delegada para el sector defensa, justicia y seguridad. Dirección de estudios sectoriales (2006). La gestión de la reforma agraria y el proceso de incautación y extinción de bienes rurales. Bogotá.
- Comisión Interclesial de Justicia y Paz. (2005). La tramoya; Derechos Humanos y palma aceitera, Curvaradó y Jiguamiandó. Bogotá, Cinep.
- El Colombiano. (2006). Urabá en la red del narcotráfico. En: Periódico El Colombiano. Consulta 29 de septiembre del 2006 (en línea) disponible en: www.elcolombiano.com
- García, C. (1996). Urabá. Región, actores y conflicto. Bogotá, Cerec.
- Gobernación de Antioquia, Departamento Administrativo de Planeación. (2002). Perfil región de Urabá. Medellín.
- González, F; Bolívar, I.; y Vázquez, T. (2002). Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción de estado. Bogotá, Cinep.
- Hernández, E. (1999). Con la esperanza intacta. En: Reflexión política. Bucaramanga, año 1, N° 2.
- Meertens, D. (1997). Tierra, violencia y género hombres y mujeres en la historia rural de Colombia 1930-1990. Bogotá, Universidad Nacional.
- Personería de Medellín. (2006). Unidad de Derechos Humanos. Informe.
- Roldán, M. (2003). A sangre y fuego. La violencia en Antioquia, Colombia (1946-1953). Bogotá, Instituto Colombiano de antropología e historia, Fundación para la ciencia y la tecnología.
- Rolland, S. (2005). Los consejos comunitarios de las comunidades negras: ¿Nueva forma de hacer política en el Bajo Atrato? En: Controversia N° 184, pp. 85-105. Bogotá, Cinep.
- Sánchez, G. (2003). Guerras, memoria e historia. Bogotá. Instituto Colombiano de Antropología.
- Vicepresidencia de la República. Observatorio de Derechos Humanos (2006). Separatas sobre Urabá. Consulta en línea diciembre 20 del 2006. Disponible en www.presidencia.gov.co .
- Zuluaga, L. (2006). El fenómeno del desplazamiento en la región del Urabá antioqueño. Medellín, informe de Consultoría elaborado para Corporación Región.